 <b>CONTRALORÍA</b> General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA: septiembre 26 del 2024
	Página 1 de 47
<b>AUTO No. 608 IMPUTACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2019-00737</b>	

<b>EXPEDIENTE SAE</b>	<b>PRF-2019-00737</b>
<b>NUMERO INTERNO ANTECEDENTE</b>	<b>2016-GC-085</b>
<b>ANTECEDENTE SIREF</b>	<b>AN-80762-2018-24872</b>
<b>ANTECEDENTE SAE</b>	<b>ANT_IP-2017-00352</b>
<b>ENTIDAD AFECTADA</b>	<b>DISTRITO DE BUENAVENTURA</b> Nit. No. 890.399.045-3
<b>CUANTIA DEL DAÑO</b>	<b>TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 34.200.000)</b>
<b>RESPONSABLES FISCALES</b>	<p><b>BARTOLO VALENCIA RAMOS</b>, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital para la época de los hechos, quien suscribe el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 03 de marzo de 2014, en calidad de Contratante.</p> <p><b>YENNY MARIA ANGULO QUINTANA</b>, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 03 de marzo de 2014.</p> <p><b>SONIA SEGURA SANCHEZ</b>, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 03 de marzo de 2014.</p> <p><b>FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO/ FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA</b> identificado con el Nit No.900.013.293-2 en calidad de prestador de servicios educativos dentro del programa de ampliación de cobertura de la Alcaldía Distrital de Buenaventura en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 03 de marzo de 2014.</p> <p><b>CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA</b> identificado con el Nit No.900.020.236-9 en calidad de prestador de servicios educativos con ocasión del Convenio de Asociación suscrito con la <b>FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO/ FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA</b> dentro del programa de ampliación de cobertura de la Alcaldía Distrital de Buenaventura en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 03 de marzo de 2014.</p>
<b>TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES</b>	<b>COMPAÑÍA ASEGURADORA LA PREVISORA SEGUROS S.A.</b> Nit. No. 860.003.400-2
<b>DIRECTIVO PONENTE</b>	<b>GUILLERMO ELIÉCER LÓPEZ PERDOMO</b>

**ASUNTO**

Los suscritos Directivos de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 268 y 271 de la Constitución Política de 1991, la Ley 610 de 2000, en concordancia con la Resolución

6541 de 2012 modificada por la Resolución 748 de 2020 de la Contraloría General de la República, habiéndose agotado la actuación prevista de la Ley 610 de 2000 y estando en la oportunidad para proferir la decisión señalada en el artículo 46 ibidem, procede conforme al artículo 48 a proferir Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal dentro del trámite del presente Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, el cual se adelanta por el manejo irregular de recursos públicos en el DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.

**ANTECEDENTE**

En oficio radicado No. 2019IE0034010, del 12 de abril de 2019, la Gerente Departamental de la Gerencia Colegiada del Valle del Cauca remite Hallazgo con presunta incidencia fiscal resultado de la Indagación Preliminar ANT\_IP-2017-00352, producto de la Actuación Especial AT de ACE No. 64 de 2014, recursos de Educación Sistema General de Participaciones SGP, Ampliación de cobertura, Vigencias 2012, 2013 y 2014, practicada al Distrito Especial de Buenaventura – Valle del Cauca.

Se asignó la sustanciación de la presente actuación a la profesional ADRIANA FRANCO LONDOÑO, con posterioridad mediante oficio No. 2021IE0075014 de fecha 09 de septiembre de 2021 el asunto se asignó al profesional DIEGO FERNANDO LENIS TRUJILLO, y finalmente a través de oficio No. 2021IE0106976 del 9 de diciembre de 2021, se designó a la profesional SONIA ENCINALES BUENO para continuar con el impulso del proceso.

Mediante Auto No. 510 del 20 de agosto de 2019, las Directivas de la Gerencia Colegiada del Valle del Cauca, ordenan la Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal con ocasión de recomendación contenida en oficio No. 2019IE0020572 del 6 de marzo de 2019, por los hechos irregulares que presuntamente afectaron el patrimonio del Distrito Especial de Buenaventura.

Mediante Auto No. 224 de fecha 27 de marzo de 2023 avocó conocimiento el contralor provincial GUILLERMO ELIECER LOPEZ PERDOMO quien a la fecha funge como Directivo.

**COMPETENCIA**

El Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, establece que corresponde a la Contraloría General de la Republica el control fiscal de los recursos de la nación, mientras que el Artículo 268 en su numeral 5 del mismo ordenamiento, determina que el Contralor General de la Republica tendrá entre otras funciones la de: *"establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma"*.

El desarrollo del marco constitucional sobre el control fiscal, se evidencia en varias normas legales y reglamentarias, como es el caso de la Ley 610 de 2000, que aborda el tema del Proceso de Responsabilidad fiscal, esencialmente en el citado Artículo 40.

Bajo este entendido, en virtud de la Resolución No. 6541 de 2012, corresponde a las Gerencias Departamentales Colegiadas:

**"Capítulo VII**

*Distribución de Competencias para el Proceso de Responsabilidad Fiscal Artículo 24. El Proceso de Responsabilidad Fiscal ordinario que trata la Ley 610 de 2000 con las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011 y el Proceso de Responsabilidad Fiscal*

Verbal establecido por la Ley 1474 de 2011 se adelantara en el nivel desconcentrado de conformidad con las siguientes reglas de competencia:

1. Gerencias Departamentales Colegiadas. Les corresponde conocer y decidir:
- a. En única instancia según corresponda, de los procesos de responsabilidad fiscal respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por el nivel desconcentrado de las entidades del orden nacional y respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse por parte de las entidades del orden territorial y descentralizada por servicios.
  - b. En única o primera instancia, de los procesos de responsabilidad fiscal que les sean asignados en virtud del control fiscal posterior excepcional.
- (...)

**Artículo 25. Sustanciación de las Decisiones en el Proceso de Responsabilidad Fiscal en el Nivel Desconcentrado.** El conocimiento, trámite y decisión de los procesos de responsabilidad fiscal será competencia de los Directivos Colegiados de la Gerencia Departamental Colegiadas quienes tendrán la dirección integral de los mismos. El funcionario sustanciador impulsará los procesos de responsabilidad fiscal y proyectará los autos y fallos, siguiendo los lineamientos trazados por el funcionario que dirige la actuación, bajo la coordinación del funcionario designado para ello. "Dichos autos los suscribe el funcionario de conocimiento o la colegiatura según el caso, pero la sustanciación y revisión de las decisiones se acreditará con la firma de los funcionarios que desempeñaron esos roles".

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, es una entidad territorial, dotada de un régimen legal, político, fiscal y administrativo independiente, y su patrimonio corresponde a los recursos transferidos por mandato de los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001, situación que lo hace sujeto de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental del Valle del Cauca.

Los pagos dentro del programa de ampliación de cobertura educativa, vigencia 2014, realizados por la Alcaldía Distrital de Buenaventura a la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapara Olivella, quien a su vez contrato con el Centro Docente Mi Pequeña Infancia, se encuentran soportados presupuestalmente en los dineros asignados por la Secretaría de Educación Distrital cuyos recursos provienen del Sistema General de Participaciones—SGP, por lo tanto, es la Gerencia Departamental del Valle del Cauca competente para adelantar la presente investigación de carácter fiscal.

**HECHOS**

La Administración Distrital de Buenaventura - Valle del Cauca, durante la vigencia 2014, efectuó la asignación de recursos para cobertura educativa, destinados a la celebración de acuerdos de voluntades con las instituciones educativas de carácter privado, recursos que fueron objeto de análisis y verificación; en consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional - MEN, adelanto interventoría a la matrícula contratada para el año 2014, por la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Buenaventura, a través de la firma interventora C&M Consultores S.A., con el fin de verificar la prestación del servicio educativo en los cupos asignados, estableciendo la existencia de estudiantes ficticios, que excedieron la matrícula para dicha vigencia, la cual se elaboró con base en las actas de visitas de campo suscritas por los auditores y los rectores de cada una de las instituciones educativas distritales, quedando plasmadas en el archivo *INEXISTENTES CONTRATADA DEPURADO-BASE AUDITORIA MEN 2014-SOPORTADA EN ACTAS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION*, que contiene la base de datos de los alumnos inexistentes detectados en la matrícula del Distrito.

Para el caso en concreto, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, entre la Secretaría de Educación de Buenaventura y la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapara Olivella, el cual tuvo como objeto *“LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL CON LA FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO PARA LA ATENCION DE 1.355 ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA, CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN EL BANCO DE OFERENTES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, PARA LA VIGENCIA LECTIVA 2024”*, contrato que tuvo un valor de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 1.219.500.000); establecimiento educativo que a su vez realiza el Convenio de asociación con varias subsedes entre ellas EL CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA cuyo objetivo era *“GARANTIZAR ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA SECUENCIA PARA QUE LOS 155 ALUMNOS DE LA SUBSEDE PUEDAN CURSAR LA TOTALIDAD DE LA EDUCACION BASICA, SIN NECESIDAD DE INTERRUPCION. ADEMAS SOLICITAR EN FORMA CONJUNTA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS EDUCATIVOS ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, por un valor de NOVENTA MIL PESOS (\$90.000) por alumno atendido por un término de DIEZ (10) meses que corresponde a la duración del convenio.*

La Administración Distrital de Buenaventura, tiene la responsabilidad de ejercer, para todos los Contratos que perfeccione y desarrolle, una correcta y adecuada vigilancia, seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero.

De acuerdo con lo anterior se adelanta la Indagación Preliminar ANT-IP-2017-00352, donde a través de la Alcaldía Distrital de Buenaventura como la Fundación Comunitaria Despertar, se procedió al acopio de la ficha técnica de los estudiantes presuntamente inexistentes de la vigencia 2014, ficha que agrupaba los siguientes documentos:

- 1) Fotocopia del documento de identidad
- 2) Registros de calificaciones o boletín individual de desempeño
- 3) Certificación del Rector sobre la matrícula de los estudiantes
- 4) Comprobantes de Egreso
- 5) Certificado de disponibilidad presupuestal
- 6) Registro presupuestal.

En oficio No. 2018EE0093160 del 6 de agosto de 2018, se solicita a la Alcaldía Distrital de Buenaventura la información pertinente, quien mediante oficio No. 2018ER0101520 del 1 de octubre de 2018, suscrito por el Secretario de Educación Distrital, remite los expedientes contractuales de ampliación de cobertura educativa vigencia 2014.

Por su parte, mediante radicado 2019ER0002327 del 11 de febrero de 2019, el Centro Docente Mi Pequeña Infancia, manifiesta que durante la vigencia 2014, la institución no prestó el servicio educativo a la totalidad de los cupos asignados.

Este hecho corresponde a los presuntos pagos indebidos efectuados por la Administración Distrital de Buenaventura por concepto de prestación del servicio educativo en el Centro Docente Mi Pequeña Infancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Contraloría General de la Republica es competente para conocer de estos hechos en los cuales existe un presunto detrimento patrimonial, con base en las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

1. **La Constitución Política** le otorgó a este ente de control la función pública del control fiscal, al señalar en su Artículo 119 que *"La vigilancia de la gestión fiscal, control de resultados de la administración y el ejercicio del control fiscal, corresponde a la Contraloría General de la República, en el Artículo 267 que "El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación..."*, señalando en el Numeral 5 del Artículo 268 ibidem, como una de sus atribuciones, *"establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma"*.
2. En desarrollo del mandato constitucional antes expuesto, se expidió, entre otras, **la Ley 610 del 18 de agosto de 2000** que consagra el proceso de responsabilidad fiscal, mediante el cual se establece su trámite, con la que se precisan los aspectos generales y se define, entre otros, el proceso de responsabilidad fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción y omisión y en forma dolosa o culposa un daño patrimonial del Estado.
3. **El Artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000**, que consagra que la Contraloría General de la República atribuye la gestión fiscal del Estado mediante un control financiero, de gestión y resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
4. **El Artículo 58 del Decreto Ley 267, numeral 4**, según el cual corresponde a la Contraloría delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, dirigir los procesos de responsabilidad fiscal como producto de la vigilancia fiscal.
5. **La Resolución Orgánica No. 6541 del 18 de abril de 2012**, determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República, en cuyo Artículo 28, asigna competencia a la Gerencia Departamental Colegiada para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal aplicables para su respectivo territorio.
6. **Los Artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993**, que define el control fiscal y los valores que fundamentan su vigilancia, como: La eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
7. **Y los Artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 40 de la Ley 610 de 2000**, que establecen los principios orientadores de la acción fiscal, la definición de gestión fiscal, objeto y elementos de la responsabilidad fiscal y daño patrimonial al Estado.
8. **Ley 1474 de 2011**, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Subsección II, Artículos 106 al 109 y Subsección III del Artículo 110 al 120. (Modificaciones a la regulación y disposiciones comunes al procedimiento ordinario y verbal de responsabilidad fiscal).

Para la supervisión e interventoría: Ley 1474 de 2011 en su Artículo 84: **Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores**. *La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por*

*mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.*

**Parágrafo 1. El Numeral 34 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002** quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

**Parágrafo 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, Artículo 8, Numeral 1,** con el siguiente literal:  
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. **Parágrafo 3.** El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. **Parágrafo 4.** Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

**NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA**

ENTIDAD	DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
Nit. No.	890.399.045-3
Representante legal	BARTOLO VALENCIA RAMOS
Dirección	Calle 2 Carrera 3, Edificio CAD, Centro
Teléfono	602 224 05 40
Página web	www.buenaventura.gov.co

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, es una entidad pública administrativa territorial del orden municipal, con personería jurídica, dotada de un régimen legal, político, fiscal y administrativo independiente, régimen especial, cuyas funciones están establecidas en la Constitución Política, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, en la Ley 136 de 1994 y demás normas que rigen para el Distrito, su patrimonio corresponde a los recursos transferidos por mandato de los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

**PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES**

Fueron vinculados en calidad de presuntos responsables fiscales al presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal, las siguientes personas:

1. BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital, para la época de los hechos, en calidad de Contratante dentro del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014
2. YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la

- época de los hechos, Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 140974 del 3 de marzo de 2014.
- 3. SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014.
  - 4. FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO hoy FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA identificado con el Nit No.900.013.293-2 en calidad de prestador de servicios educativos dentro del programa de ampliación de cobertura de la Alcaldía Distrital de Buenaventura en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 03 de marzo de 2014, representada legalmente por SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA identificada con la cédula de ciudadanía No.31.588.511 de Buenaventura (Valle del Cauca)
  - 5. CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA identificado con el Nit. No. 900915733-2, en calidad de prestador de servicios educativos dentro del programa de ampliación de cobertura de la Alcaldía Distrital de Buenaventura en cumplimiento del convenio de asociación de fecha 03 de marzo de 2014, representado legalmente por Helder Harvey García Pinillo identificado la cédula de ciudadanía No.76.339.143 de Buenaventura (Valle del Cauca) Según certificado de matrícula mercantil expedido el 14 de agosto de 2024 se designó como representante legal liquidador a Francia Gamboa Valencia

**TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**

De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, fue vinculada en calidad de Tercero Civilmente Responsable Fiscal al presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, a la aseguradora **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2, al expedir Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial No. 300010, expedida el 27 de enero de 2015 con vigencia desde el 27 de enero de 2015 hasta el 23 de enero de 2016, tomador Distrito Especial de Buenaventura, identificado con el Nit. No. 890.399.045-3, asegurado Bartolo Valencia Ramos identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, por el riesgo amparado: Fallo con Responsabilidad Fiscal, por un valor asegurado de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000). Comunicada al Representante Legal de la aseguradora mediante Oficio No. 2019EE0104756 del 26 de agosto del 2019.

**ACTUACIONES PREPROCESALES**

FECHA	TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN COMUNICACION
20180803	Auto No. 400 Indagación Preliminar	Comunicada mediante oficio No. 2018EE0093160
20181029	Auto No. 565 Pruebas	Notificado por Estado No. 156-2018 del 31 de octubre de 2018
20190123	Auto No. 032 Pruebas	Notificado por Estado No. 009-2018 del 25 de enero de 2019
20190123	Auto No. 033 Avoca conocimiento	Notificado por Estado No. 009-2018 del 25 de enero de 2019
20190206	Auto No. 063 Avoca conocimiento	Notificado por Estado No. 020-2019 del 15 de febrero de 2019
20190306	Recomendación de apertura	Oficio No.2019IE0020572
20190618	Traslado de denuncia No. 2019-153706-80764-D	Oficio No.2019IE0053165

**ACTUACIONES PROCESALES**

Auto No. 511 del 20 de agosto de 2019 mediante el cual se dispone la Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, diligencias de notificación oficio No. 2019IE0094378:

PRESUNTO	FECHA	RADICACION	NOTIFICACION	ASUNTO
BARTOLO VALENCIA RAMOS	25/09/2019 04/06/2024	2019EE0121065 2024EE0103829	Avisos No.180/2019 No.021/2024	Auto No. 511 de 20/08/2019
YENNY MARÍA ANGULO QUINTANA	23/09/2019	Acta No. 127/2019	Personal Complejo Carcelario Penitenciario Jamundí COJAM	
SONIA SEGURA SÁNCHEZ	09/02/2024	2024EE0036835	Personal electrónico	
CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA	15/10/2019	2019EE0130521	Aviso No.193/2019	
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	26/08/2019	2019EE0104756	Comunicación de vinculación	Auto No. 511 de 20/08/2019
FUNDACIÓN GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACÍFICO	11/03/2024	2024EE0044285	Aviso No .090/2024	Auto de vinculación No.090 de 21/02/2024
FUNDACIÓN MANUEL ZAPATA OLIVELLA	11/04/2024	2024EE0066687	Aviso	Auto No.511 de 20/08/2019 Auto No.190 de 21/02/2024 Auto No.118 de 29/02/2024

FECHA	TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN COMUNICACION
20190911	Auto No. 576 Designa profesional para práctica de prueba	Estado No.140-2019 del 16 de septiembre de 2019
20200714	Auto No. 253 Avoca conocimiento	Estado No. 047-2019 del 15 de julio de 2020
20200714	Auto No. 299 Suspensión de términos procesales	Estado No. 049-2020 del 21 de julio de 2020
20201023	Auto No. 507 Reanudación de términos	Estado No. 103-2020 del 28 de octubre de 2020
20200316	Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0063 Suspensión de términos	Publicada en diario oficial
20200320	Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0064 Suspensión de términos	
20200701	Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 0070 Reanudación de términos	
20201111	Auto No. 533 Designa profesional para práctica de prueba	Estado No. 111-2020 del 18 de noviembre 2020
20210916	Auto No. 628 Avoca conocimiento	Estado No. 167-2021 del 20 de octubre de 2021
20230203	Auto No. 032 Decreta práctica de pruebas	Estado No. 021-2023 del 09 de febrero de 2023



FECHA	TIPO DE PROVIDENCIA	NOTIFICACIÓN COMUNICACION
20230221	Auto No. 082 Designa profesional para práctica de prueba	Estado No. 030-2023 del 23 de febrero de 2023
20230327	Auto No. 224 Avoca conocimiento	Estado No. 055-2023 del 14 de abril de 2023
20231218	Traslado de informe técnico	Fijación en lista No. 123
20240221	Auto No. 090 Vinculación de presunto responsable fiscal y práctica de prueba	Estado No. 032-2024 del 23 de febrero de 2024
20240221	Auto No. 118 Aclara y modifica Auto No. 090	Estado No. 040-2024 del 06 de marzo de 2024
20240612	Auto No. 334 reconoce personería a apoderado	Estado No. 094-2024 del 13 de junio de 2024
20240812	Auto No. 479 Designa apoderados de oficio	Estado No. 132-2024 del 13 de agosto de 2024
20240816	Auto No. 500 Designa apoderado de oficio	Estado No. 136-2024 del 20 de agosto de 2024
20240823	Auto No. 507 Coloca a disposición informe técnico	Estado No. 140-2024 del 27 de agosto de 2024
20240828	Traslado de informe técnico	Fijación en lista No.048

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Obra en el expediente electrónico el siguiente acervo probatorio.

- Los incorporados del hallazgo fiscal producto de la actuación especial AT No. 64 de 2014:
- ✓ ANEXO 4. INEXISTENTES MATRICULA CONTRATADA 2014 MEN
  - ✓ Anexos\_Complementacion\_Hallazgo\_No. 4
  - ✓ 20160728\_Soportes\_ANEXO 3. DUPLICIDADES 2012-2013-2014
  - ✓ 20171006\_Respuesta\_Alcaldia Distrital\_2017ER0099316
- Con respecto a los documentos generados dentro de los procesos contractuales celebrados entre el Distrito y el Centro Docente Mi Pequeña Infancia:
- ✓ 20190211\_CDMiPequeñaInfancia\_2019ER0002327
  - ✓ 20230731 oficio No. 2023ER0134327 Respuesta de la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico
  - ✓ 20230731 oficio No. 2023ER0134323 Respuesta Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico
  - ✓ 20240401 oficio No. 2024ER0065632 Respuesta de la Secretaría de Etnoeducación de B/tura
  - ✓ 20240418 diligencia de visita fiscal

VERSIONES LIBRES Y ESPONTÁNEAS

De acuerdo con las actuaciones que reposan en el expediente, el Despacho realizó las gestiones de notificación a los presuntos responsables fiscales y convocó a los mismos a presentar versión libre y espontánea de los hechos objeto de investigación.

- **YENNY MARIA ANGULO QUINTANA**, rinde versión libre el día 03 de julio de 2024, diligencia requerida mediante despacho comisorio No.01-2024 con radicación No.2024EE0098198:

“...Hoy, tres (03) del mes de julio de año 2024, en las instalaciones de investigaciones internas cojam siendo las 2:45 horas, compareció la señora YENNY MARIA ANGULO

QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66747.066 expedida en Buenaventura (Valle del Cauca), en condición de presunta responsable, con el fin de rendir versión libre y espontánea dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF-2019-00730, que la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca adscrita a la Contraloría General de la República inició en su contra. En consecuencia, se le hace saber, que ésta diligencia es libre de todo apremio, sin juramento alguno, y con el fin de garantizar el debido proceso y sus derechos de defensa y contradicción, si lo considera necesario puede ser asistida por un abogado, a lo cual manifestó: si, es necesario en esta diligencia. Se procede a continuar con la versión libre y espontánea previo conocimiento del contenido del artículo 33 de la Constitución Política, el cual señala que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. PREGUNTADO: Generales de ley. CONTESTO: Mi nombre Es YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, me identifico con la cédula de ciudadanía No. 66.747.066 expedida en Buenaventura (Valle del Cauca). Edad 50 años, Profesión: contadora publica, estado civil: soltera, dirección actual: cojam, dirección comercial: cojam, correo electrónico: al cual autorizo para envío de notificaciones. PREGUNTADO: Tiene conocimiento del motivo por el cual se le cita a la presente diligencia o requiere un recuento de los hechos. CONTESTO: no requiero recuento...”

Atendiendo a que en la presente diligencia de versión libre y espontánea la presunta responsable fiscal actualmente privada de la libertad, solicita apoderado de oficio, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 610 del 2000, el Despacho procedió a designar Apoderado de Oficio mediante el Auto No. 528 del 30 de agosto de 2024.

- **FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO hoy FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA** presenta escrito mediante el cual rinde versión libre el día 03 de julio de 2024, diligencia requerida mediante despacho comisorio No.01-2024 con radicación No.2024EE0098198:

“...Hoy, dos (02) del mes de julio del año 2024, siendo las 8AM horas, **YO SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA** identificada con la C.C. No.31.588.511 expedida en Buenaventura (O QUIEN HAGA SUS VECES), en calidad de Representante Legal de **LA FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO HOY FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA IDENTIFICADA CON EL Nit No.9000132293-2** presunto responsable fiscal, procede a rendir versión libre y espontánea dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00737, que la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca adscrita a la Contraloría General de la República inició en su contra. En consecuencia, se le hace saber, que ésta diligencia es libre de todo apremio, sin juramento alguno, y con el fin de garantizar el debido proceso y sus derechos de defensa y contradicción, si lo considera necesario puede ser asistida por un abogado, a lo cual manifestó: **NO**, es necesario en esta diligencia. Se procede a continuar con la versión libre y espontánea previo conocimiento del contenido del artículo 33 de la Constitución Política, el cual señala que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. PREGUNTADO: Generales de ley. CONTESTO: Mi nombre es SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA, me identifico con la cédula de ciudadanía No. 31.588.511 expedida en Buenaventura (Valle del Cauca), edad: 43 años, Profesión: **CONTADORA PUBLICA** estado Civil: **SOLTERA**, dirección actual: Kra 52 calle 52 N 2 – 03 Barrio el Ruiz dirección comercial: Kra 52 calle 52 N 2 – 03 Barrio el Ruiz, correo electrónico: samitorres18@hotmail.com al cual **SI** autorizo para envío de notificaciones. PREGUNTADO: Tiene conocimiento del motivo por el cual se le cita a la presenta diligencia o requiere un recuento de los hechos. CONTESTO: **SI** requiero un recuento...” Una vez realizado el recuento de los hechos materia de investigación absuelve las preguntas y manifiesta:“...PREGUNTADO: Sírvase señalar todo lo que a usted le conste sobre los anteriores hechos materia de investigación: CONTESTO: Mediante acta No. 007 del 20 de noviembre del 2015 de Reforma Estatutos y Nombramiento Órganos de Administración, fui nombrada como Representante Legal de la FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA, Y que en años anteriores tenía el nombre de FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO y su Representante Legal era la señora MAYERLING RIASCOS CAICEDO, identificada con la cedula No.29.229.548. de Buenaventura. Mi participación como Representante Legal en la Fundación Manuel Zapata

Olivella fue a partir del 20 de noviembre del 2015. Y ustedes mediante Auto No. 0400 fechado 03/08/2018 lo cual se dispuso la apertura de la “Indagación Preliminar con ocasión del hallazgo con presunta incidencia fiscal correspondiente: Ampliación de Cobertura vigencias 2012, 2013 y 2014, y Alimentación Escolar, PAE-MEN vigencia 2014.” **Como podrán observar los hechos establecidos en el hallazgo ocurrieron antes de mi asignación como Representante Legal. 1. Anexo copia de estatutos. PREGUNTADO:** Mediante oficio No.2024EE0075220 de fecha 23/04/2024 se solicitó a la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico identificada con el Nit No9000132293-2 hoy Fundación Manuel Zapata Olivella, aportar la documentación correspondiente a las evidencias que permitieran verificar la prestación del servicio educativo de los alumnos reportados en el Anexo 1 suministrado por ustedes. Sírvase señalar todo lo que a usted le conste sobre los anteriores hechos materia de investigación: **CONTESTO:** Se aporta las siguientes evidencias las cuales se encontraban en el archivo físico de la fundación. - 1.- Anexo 1 del 2013 2.- Anexo 1 del 2014 3.- Actas de visitas 2013 4.- Actas de visita 2014 5.- Convenio entre las Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico y los diferentes colegios. Así mismo aporto mi nombre completo: **SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA** Cedula de Ciudadanía No. 31.588.511 expedida en Buenaventura Dirección: Kra 52 calle 52 N 2 – 03 Barrio el Ruiz Correo Electrónico: samitorres18@hotmail.com **PREGUNTADO:** Sírvase indicar cuales fueron los mecanismos utilizados para efectuar control de verificación de la información de la matrícula remitida al Ministerio de Educación Nacional durante las vigencias 2013 y 2014 siendo este el insumo básico para la asignación de recursos de educación. **CONTESTO:** **Como podrán observar los hechos establecidos en el hallazgo ocurrieron antes de mi asignación como Representante Legal. PREGUNTADO:** Sírvase indicar si se realizaba control permanente o eventual de las variaciones o cambios que se presentaban con respecto a la información reflejada en el sistema de matrícula SIMAT y/o en los reportes de novedades. **CONTESTO:** **Como podrán observar los hechos establecidos en el hallazgo ocurrieron antes de mi asignación como Representante Legal PREGUNTADO:** Sírvase manifestar si tiene algo más que adicionar, aclarar o modificar a la presente diligencia: **CONTESTO:** No tengo nada más que argumentar...”

Habiendo sido citados los siguientes presuntos responsables fiscales, no comparecieron ni aportaron escrito de diligencia de versión libre y espontánea:

CITACIONES A VERSIONES LIBRES Y ESPONTANEAS				
No.	PRESUNTO(A) RESPONSABLE	FECHA	OFICIO No.	VERSION LIBRE
1	BARTOLO VALENCIA RAMOS	31/05/2024	2024EE0102836	No compareció 20/06/2024
3	SONIA SEGURA SANCHEZ	31/05/2024	2024EE0102843	No compareció 20/06/2024

Ante solicitud de designación de apoderado de oficio por parte de YENNY MARIA QUINTANA ANGULO y a la no comparecencia a diligencia de versión libre y espontánea de los demás presuntos responsables fiscales, con el fin de garantizarles el debido proceso y su derecho a la defensa, el Despacho procedió a designarles Apoderados de Oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 610 de 2000:

No.	ESTUDIANTE	C.C. No.	APODERADO(A) DE OFICIO DE	AUTO No.
1	MARTIN CUELLAR ROMERO	1.005.893.052	BARTOLO VALENCIA RAMOS	479 de 12/08/2024
2	VICTORIA ANDREA GONZALEZ HURTADO	1.144.195.526	YENNY MARIA ANGULO QUINTANA	

No.	ESTUDIANTE	C.C. No.	APODERADO(A) DE OFICIO DE	AUTO No.
3	SARA VALENTINA OBANDO LOPEZ	1.004.216.817	FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO / FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA	
4	DANIEL ESTRADA DIAZ	1.005.891.920	CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA	
5	ANGEL GABRIEL ANGULO PEREZ	1.109.660.011	SONIA SEGURA SANCHEZ	500 de 12/08/2024

CONSIDERACIONES

OBJETO Y FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

A través del Proceso de Responsabilidad Fiscal se obtiene una declaración jurídica, en la cual se predica con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan de sus actuaciones irregulares, en ejercicio o con ocasión de la gestión fiscal que ha realizado, y que está obligado a reparar económicamente el daño causado al erario por su conducta dolosa o gravemente culposa (artículo 1 Ley 610 de 2000).

La responsabilidad que se declara es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de un servidor público o de un particular o persona que ejerce funciones públicas, por el incumplimiento de los deberes que le incumben, o por estar incurso en conductas prohibidas o irregulares que afectan los bienes o recursos públicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

Es patrimonial, porque como consecuencia de su declaración el imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Esta responsabilidad puede comprender desde la órbita de la Gestión Fiscal a los directivos de las entidades y demás personas que manejen o administren recursos o fondos públicos, así como a quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación; también a los contratistas y particulares que vinculados al proceso hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, desde la Gestión Fiscal, con ocasión de esta o que contribuyan al detrimento público.

La Responsabilidad Fiscal tiene carácter resarcitorio ya que su único fin consiste en reparar el patrimonio público que ha sido menguado por servidores públicos o particulares que realizaron una gestión fiscal irregular. Esto la distingue de las responsabilidades penal y disciplinaria. La Responsabilidad Fiscal no pretende castigar a quienes han causado un daño patrimonial al Estado, sino que busca simplemente resarcir o reparar dicho daño.

Para corroborar este carácter indemnizatorio de la responsabilidad fiscal sólo hace falta consultar el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que a la letra dice: **“Objeto de la responsabilidad fiscal.** La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o

*culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.”*

En este mismo orden de ideas es una responsabilidad independiente de la disciplinaria y la penal. Por ello, una misma conducta puede dar origen a los tres tipos de responsabilidad - fiscal, penal y disciplinaria. La penal y la disciplinaria tienen un propósito concreto: castigar determinadas conductas que se consideran socialmente reprochables. La Responsabilidad Fiscal por el contrario sólo busca que el patrimonio público permanezca indemne. El propósito es indemnizatorio: quienes han causado un detrimento patrimonial al erario deben repararlo.

De acuerdo con lo anterior, la Responsabilidad Fiscal se estructura sobre tres elementos: a) un Daño Patrimonial al Estado; b) una Conducta Dolosa o Gravemente Culposa atribuible a una persona que realiza Gestión Fiscal y; c) un nexo causal entre el Daño y la Conducta. Sólo en el evento de que se reúnan estos tres elementos puede endilgarse responsabilidad fiscal a una persona.

Dada la importancia del punto es necesario desarrollar el concepto de *“Daño Patrimonial al Estado”*.

Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe ser cierto. Se entiende que el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante.

La precitada Ley 610 del 15 de agosto de 2000 en su artículo 6 consagra: ***“Daño Patrimonial al Estado.*** *Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público.”* (Subrayado declarado inexecutable Sentencia C-340-2007).

Lo primero que se destaca es que el daño patrimonial al Estado es producido en ejercicio de la gestión fiscal. Esto es coherente con el artículo 5 de la misma ley que dispone como uno de los elementos de la Responsabilidad Fiscal *“una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.”* Es lógico que si la responsabilidad fiscal sólo puede ser atribuida a alguien que realiza gestión fiscal necesariamente esa responsabilidad lo será por un daño causado en ejercicio de dicha gestión. Deben reunirse, entonces, los dos elementos: a) una persona que realiza gestión fiscal o actúa con ocasión de esta; y b) el daño debió haber sido producido en ejercicio de esa gestión fiscal o con ocasión de esta. Contrario sensu si el daño lo efectúa una persona que no realiza gestión fiscal o no se produce en ejercicio de la gestión fiscal, no existirá responsabilidad fiscal.

Este punto es central en el estudio de la Responsabilidad Fiscal puesto que ella se estructura sobre el concepto de Gestión Fiscal. La Contraloría General de la República la vigila y la Responsabilidad Fiscal precisamente se deriva de ella. Esta es el pilar, contemplado en el artículo 3 de la ley 610 de 2000, sobre el cual se debe estructurar cualquier teoría seria al respecto. Es el elemento propio que la diferencia de otras responsabilidades y le da autonomía conceptual.

En segundo lugar, la Ley nos dice que la gestión fiscal que produce el daño es aquella antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Lo cual básicamente quiere decir que el daño patrimonial al Estado ocurre cuando los gestores fiscales actúan de forma contraria a los principios que rigen la función administrativa en general y la gestión fiscal en particular.

En síntesis, el Daño Patrimonial al Estado es producido en desarrollo de la Gestión Fiscal. La Ley contempla una serie de calificativos para la gestión fiscal que produce el daño: en general se trata de una gestión fiscal que contraría los principios establecidos para la función administrativa y los fines o cometidos Estatales.

**EL CASO CONCRETO**

La Alcaldía Distrital de Buenaventura dentro del Programa de Ampliación de Cobertura Educativa, suscribió con la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapara Olivella, el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de Marzo de 2014, por un valor de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.219.500.000); cuyo objeto contractual se definió como: *“LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL CON LA FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO PARA LA ATENCION DE 1.355 ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA, CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN EL BANCO DE OFERENTES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, PARA LA VIGENCIA LECTIVA 2024”*,

La Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapata Olivella, realiza el Convenio de Asociación con varias instituciones privadas, para este caso concreto con el Centro Docente Mi Pequeña Infancia cuyo objetivo era *“GARANTIZAR ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA SECUENCIA PARA QUE LOS 155 ALUMNOS DE LA SUBSEDE PUEDAN CURSAR LA TOTALIDAD DE LA EDUCACION BASICA, SIN NECESIDAD DE INTERRUPCION. ADEMAS SOLICITAR EN FORMA CONJUNTA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS EDUCATIVOS ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.*

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional - MEN, adelanto interventoría a la matrícula contratada para el año 2014, por la Secretaria de Educación del Distrito Especial de Buenaventura, a través de la firma interventora C&M Consultores S.A., con el fin de verificar la prestación del servicio educativo en los cupos asignados, estableciendo la existencia de estudiantes ficticios, que excedieron la matrícula para dicha vigencia, la cual se elaboró con base en las actas de visitas de campo suscritas por los auditores y los rectores de cada una de las instituciones educativas distritales, quedando plasmadas en el archivo *INEXISTENTES CONTRATADA DEPURADO-BASE AUDITORIA MEN 2014-SOPORTADA EN ACTAS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION*, que contiene la base de datos de los alumnos inexistentes detectados en la matrícula del Distrito.

De acuerdo a lo anterior se adelanta la Indagación Preliminar ANT-IP-2017-00352, donde a través de la Alcaldía Distrital de Buenaventura y con la Fundación Comunitaria Despertar, se procedió al acopio de la ficha técnica de los estudiantes presuntamente inexistentes de la vigencia 2014, la cual consta de los siguientes documentos:

- 1.- Fotocopia del documento de identidad,
- 2.- Registros de calificaciones o boletín individual de desempeño,
- 3.- Certificación del Rector sobre la matrícula de los estudiantes,
- 4.- Comprobantes de Egreso,
- 5.- Certificado de disponibilidad presupuestal,
- 6.- Registro presupuestal.

Tabla No.1. Ficha Contrato de Prestación de servicios No. 140974

DATOS DEL CONTRATANTE	CONTRATANTE		DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA - SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL		
	IDENTIFICACIÓN		NIT. 890.399.045-3		
	REPRESENTANTE LEGAL		BARTOLO VALENCIA RAMOS		
	CARGO		ALCALDE DISTRITAL		
	IDENTIFICACIÓN		C.C. No. 16.469.636		
DATOS DEL CONTRATISTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS		FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR	LUGAR DE EJECUCION
	No. 140974		3 DE MARZO DE 2014	\$1.219.500.000	Distrito especial de Buenaventura - Valle del Cauca.
	CONTRATISTA		FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO		
	IDENTIFICACIÓN		NIT. 900.013.293-2		
	REPRESENTANTE LEGAL		DIANA MAYERLING RIASCOS CAICEDO		
	IDENTIFICACIÓN		C.C. No. 29.229.548 de Buenaventura (Valle del Cauca)		
	PLAZO INICIAL		10 meses	DESDE: 3 de marzo de 2014	HASTA: diciembre de 2014
	FORMA DE PAGO		El Distrito Especial de Buenaventura cancelará al contratista prestador del servicio educativo, 10 cuotas mensuales vencidas por un valor de CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$121.950.000), cada una, previa presentación de informes por parte del Contratistas y la firma del funcionario designado		
	SUPERVISIÓN		Sera efectuada por la secretaria de educación y/o por la interventoría que llegare a ser contratada por el distrito.		
	SUPERVISOR		YENNY MARIA ANGULO QUINTANA		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	CARGO		Secretaria de Educación		
	TIPO DE CONTRATACION		DIRECTA		
	CLASE DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
	OBJETIVO		Prestación de servicio educativo estatal con el Centro Docente Mi Pequeña Infancia para la atención de 155 estudiantes beneficiarios del programa de ampliación de cobertura educativa, con instituciones del sector privado inscritas en el banco de oferentes del distrito de Buenaventura, para la vigencia 2014.		
	FUENTE DE FINANCIACIÓN		RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP – EDUCACION.		
ESTADO		LIQUIDADO			
PAGOS SOPORTE					
No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO No.	CONCEPTO	VALOR FACTURA	FUENTE FINANCIACIÓN
201401371	01/05/2014	87477	PRIMERA CUOTA	\$ 121.950.000	S. G. P.
201401442	05/06/2014	88068	SEGUNDA CUOTA	121.950.000	S. G. P.
201403974	01/08/2014	89151	TERCERA CUOTA	121.950.000	S. G. P.
201405921	06/10/2014	90489	CUARTA CUOTA	121.950.000	S. G. P.
201405935	08/10/2014	91041	QUINTA CUOTA	121.950.000	S. G. P.
201407125	12/11/2014	91479	SEXTA CUOTA	121.950.000	S. G. P.
201407126	12/11/2014	91473	SEPTIMA CUOTA	121.950.000	S. G. P.
201409739	05/05/2015	96521	NOVENA CUOTA	121.950.000	S. G. P.
201409698	04/03/2015	95031	DECIMA CUOTA	121.950.000	S. G. P.
TOTAL, PAGADO:				\$1.097.550.000	S. G. P

En oficio radicado No. 2018EE0093160 del 06 de agosto de 2018, se solicita a la Alcaldía Distrital de Buenaventura la información pertinente y mediante oficio No. 2018ER0101520 del 01 de octubre de 2018, suscrito por el Secretario de Educación Distrital se remiten los expedientes contractuales de ampliación de cobertura educativa vigencia 2014.

Por su parte, mediante radicado 2019ER0002327 del 11 de febrero de 2019, el Centro Docente Mi Pequeña Infancia, manifiesta que durante la vigencia 2014, la institución no presto el servicio educativo a:

DOCUMENTO	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1	NOMBRE 2	FECHA DE NACIMIENTO
1115451840	ALZATE	MAZUERA	JHOAN	STEFAN	28/02/2006
1117584251	PAZ	MURILLO	EILYN	FERNANDA	17/01/2006
1150937364	RAMIREZ	GOMEZ	JHOAN	SAMIR	01/08/2009



Este hecho corresponde a los presuntos pagos indebidos efectuados por la Administración Distrital de Buenaventura a la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico, por concepto de prestación del servicio educativo en el Centro Docente Mi Pequeña Infancia, lo cual obedece a las deficiencias en los mecanismos de control y de supervisión de la contratación de los recursos de ampliación de cobertura por parte de la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura. La presunta sobrestimación de la matrícula contratada conlleva a la pérdida de recursos potenciales que estaban dirigidos a la educación de niños y adolescentes del Distrito Especial de Buenaventura.

De acuerdo con la evidencia obtenida, se solicita adelantar informe técnico, en los términos del artículo 27 y el artículo 31 de la Ley 610 del 2000, en el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, requiriéndole al profesional designado establecer si se prestó el servicio educativo a todos los estudiantes a que se obligó el Contratista, a través del Centro Educativo Abeja Maya, o en su defecto establecer los estudiantes a los que no se les prestó y su debida cuantificación.

Los informes técnicos y complementos de los informes entregados por el Ingeniero de Sistemas Edward Adrián Colorado Ángel, arrojaron varias conclusiones, las cuales se detallan a continuación:

1. En el primer informe técnico rendido el 12 de diciembre de 2023 mediante oficio No. 2023IE0131683 se llegó a la conclusión:

*“Resultado del análisis realizado se concluye lo siguiente:*

La cuantificación del valor real de los pagos efectuados dentro del contrato de prestación de servicios educativos 140974 del 4 de marzo de 2014, suscrito entre la alcaldía distrital de Buenaventura y la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico de acuerdo a lo pactado en el contrato referenciado.

Debido a que no se logró obtener el anexo 1 del contrato en mención, documento indispensable para realizar el cruce y análisis con la información de los estudiantes inexistentes reportados en la interventoría realizada por el Ministerio de Educación, no fue posible definir cuáles fueron los estudiantes atendidos y presuntamente no atendidos por la institución del contrato número 140974. Tampoco fue posible obtener la información del contacto de la institución educativa.

En este momento no se obtuvo la identificación de los estudiantes que aparecen como ficticios o no atendidos, ni un valor de detrimento patrimonial concreto, por lo que fue necesario solicitar y realizar un segundo informe, para lo cual en el mes de abril se realiza Visita Fiscal Especial a las oficinas de la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura, con el fin de recaudar información que atañe a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios, materia de investigación.

Atendiendo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 610 de 2000, mediante **Auto No.090 de fecha 21 de febrero de 2024** se decretó la práctica de diligencia de visita fiscal con rendición de informe técnico emitido por un profesional especializado con perfil en ingeniería de sistemas, realizado en los archivos de la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura y/o en la sede de la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico (Contratista), con el propósito de recaudar la información requerida que demuestre la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 03 de marzo de 2014 con respecto establecer la prestación del servicio educativo contratado obteniendo el siguiente resultado:



**ACTA DE DILIGENCIA VISITA FISCAL ESPECIAL  
PRF-2019-00737**

**ENTIDAD AFECTADA: DISTRITO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA**

<b>FECHA:</b> 17 al 19 de abril de 2024
<b>LUGAR:</b> Alcaldía Distrital de Buenaventura – Secretaria de Educación - Piso 6

**PARTICIPANTES  
SECRETARIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**

Nombre	Cargo
Irlanda Rodríguez Castro	Secretaria de Etnoeducación
Félix Alexander Lozano Palacios	Líder de Cobertura Educativa

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Nombre	Cargo
Edward Adrián Colorado Ángel	Profesional Universitario – Apoyo Técnico
Sonia Encinales Bueno	Profesional Universitario- Sustanciadora

**1. Objetivo de la Visita**

Practicar Visita Fiscal Especial, en los términos del Artículo 31 de la Ley 610 de 2000, a la Secretaria de Educación del Distrital de Buenaventura, o en el lugar donde se encuentren ubicados sus archivos; con el propósito de recaudar información que atañe a la ejecución del Contrato Prestación de Servicios No.140974 suscrito por la Alcaldía Distrital de Buenaventura.

**2. Desarrollo**

“En el distrito de Buenaventura Valle del Cauca, el 17 de abril de 2024, siendo las 11:00 am; los profesionales universitarios Sonia Encinales Bueno y Edward Adrián Colorado Ángel, adscritos a la Contraloría General de la Republica Gerencia Valle, se hicieron presentes en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Buenaventura Valle del Cauca, ubicada en la Calle 2 Carrera 3 Edificio CAD Barrio Centro, con el fin de llevar a cabo diligencia de visita fiscal dispuesta mediante Auto No. 090 fechado 21 de febrero de 2024 dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00737 siendo atendida por los funcionarios Félix Alexander Lozano Palacios, Líder de Cobertura Educativa e Irlanda Rodríguez Castro, Secretaría de Etnoeducación, quienes están a cargo de suministrar la información y documentación requeridas en el desarrollo de la presente diligencia.

Una vez iniciada la reunión, nuevamente se informa que la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca adscrita a la Contraloría General de la República, mediante Auto No. 511 del 20 de agosto de 2019, ordenó la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00737, con el fin de esclarecer el hallazgo con presunta incidencia fiscal resultado de la Indagación Preliminar ANT\_IP-2017-00352 realizada a instancias de la Actuación Especial AT de ACE No.64 de 2014, recursos de Educación Sistema General de Participaciones SGP, Ampliación de Cobertura, vigencias 2012, 2013 y 2014, practicada al Distrito Especial de Buenaventura - Valle del Cauca - Secretaría de Educación en la administración de los recursos del SGP durante la vigencia 2019.

Conforme a los anterior, mediante oficio No. 2023EE0059783 del 20 de abril de 2023 se solicitó a la Secretaría de Educación de Buenaventura suministrar la siguiente información respecto al Contrato No.140974 suscrito con la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico en cumplimiento del programa de ampliación de cobertura, vigencia 2014, con el fin evidenciar la prestación del servicio educativo:

- 1. Copia del Contrato No.140974 y anexo No.1
- 2. Nombre, datos personales y ubicación del representante legal de la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico
- 3. Informes de supervisión y comprobantes de pago del servicio educativo.

Teniendo en cuenta que no se obtuvo respuesta, se reiteró el requerimiento mediante los oficios No. 2024EE0055886 y No. 2024EE0055918 enviados por correo electrónico el 22 de marzo de 2024 que contienen la siguiente solicitud:

“...Atendiendo al objeto del Contrato No. 140974 del 03 de marzo de 2014, suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura (Valle del Cauca) y el Gimnasio Cooperativo del Pacífico identificado con el Nit No.900013293-2 en cumplimiento al programa de ampliación de cobertura, vigencia 2014, con el fin de establecer la prestación del servicio educativo, respetuosamente se requiere suministrar la siguiente documentación que permita realizar cruce y análisis con la información de los alumnos inexistentes reportados en la interventoría realizada por el Ministerio de Educación:

1. Copia del Contrato No.140974 y ANEXO No.1
2. Relación detallada de los estudiantes atendidos con el servicio educativo a través del Centro Docente Mi Pequeña Infancia adjuntando las respectivas evidencias.
3. Nombre, datos personales y ubicación del representante legal de la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy denominado Fundación Manuel Zapata Olivella identificado con el Nit No.900013293.
4. Informes de supervisión y comprobantes de pago del servicio educativo.

El requerimiento anterior fue remitido por parte del Jefe de Oficina de Control Interno Libardo Riascos Meneses a la Secretaría de Etnoeducación para su debida respuesta, quien al tiempo solicitó ampliación del plazo para contestar, ante lo cual la CGR concedió el termino de 10 días hasta el viernes 12 de abril de 2024 para suministrar la información y documentación requeridas.

Mediante oficio No. 0423-18-053 del 26 de marzo de 2024 la Secretaría de Etnoeducación otorgó respuesta al requerimiento, suministrando un link para descargar la información al cual no se logró acceder, motivo por el cual se hizo necesario desplazarnos al sitio y efectuar la presente diligencia de visita fiscal, la cual fue anunciada mediante oficio No. 2024EE0067602 del 12 de abril de 2024 enviado por correo electrónico.

Al respecto interviene el líder de Cobertura Educativa Félix Alexander Lozano Palacios, quien manifiesta que ante el requerimiento de Control Interno se suministró información y documentación parcial por cuanto en el despacho no reposa la totalidad de la misma debido a que la Fiscalía General de la República con ocasión de investigación penal contra Bartolo Valencia Ramos Excalcalde municipal y otros, retiró la documentación la cual no fue devuelta al despacho.

Conforme a lo anterior, se procede a radicar en el despacho, el oficio 2024EE0070079 del 16 de abril de 2024, suscrito por Guillermo Eliecer López Perdomo, Contralor Provincial con el fin de reiterar los requerimientos anteriormente mencionados, para lo cual se suspende la diligencia, acordando darle continuidad al día siguiente a primera hora para recaudar la información y documentación requerida.

Siendo las 9:00 am del 18 de abril de 2024, en el despacho de la Secretaría de Etnoeducación, con la diligencia de visita fiscal siendo atendidos por el Líder de Cobertura Educativa Félix Alexander Lozano Palacios quien manifiesta que no reposa la carpeta física y aporta la información solicitada en forma digital por correo electrónico donde aparece en link de Google drive y es la siguiente:

1. Contrato No.140974 de fecha 03 de marzo de 2014
2. Anexo 1 en formato Excel
3. Comprobantes de egreso
4. Certificación de existencia del establecimiento educativo Fundación Manuel Zapata Olivella.

El Ingeniero Edward Adrián Colorado Ángel verifica la información suministrada, revisando el Anexo 1 suministrado, dejando constancia que no corresponde al Anexo 1 del convenio, porque es un archivo generado del SIMAT 2014 correspondiente al Centro Docente Mi Pequeña Infancia.

Con respecto a la diligencia de visita fiscal programada para el día de hoy en las instalaciones del establecimiento educativo Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy denominado Fundación Manuel Zapata Olivella identificado con el Nit. No.9000132293-2 se deja constancia que no será posible realizarla, debido a que se encuentra ubicado en zona de difícil acceso por diversas causas sociales, debiendo solicitar apoyo policial para desplazarnos, además de manera reiterada se ha solicitado dirección actual y número de contacto para comunicarnos con la Sra. Sandra Milena Torres Represente legal sin obtener respuesta...”

2. Acorde a lo anterior, con fundamento en la información y documentación recaudada en la diligencia de visita fiscal previamente detallada mediante oficio No. 2024IE0059084 del 03 de junio de 2024, se rinde un SEGUNDO INFORME TECNICO por el cual se concluye lo siguiente:

“...Dentro de la visita fiscal se solicitó nuevamente la información del contrato No. 140974 específicamente el anexo 1, sin embargo, la Secretaría informó que no tienen esta información. Previamente se había solicitado a la institución educativa la información del contrato 140974 por medio de oficio No. 2024EE0056026 del 22 de marzo del 2024, logrando

que la institución educativa aportara el anexo 1 del contrato en mención, por medio de correo enviado el 12 de abril del 2024.

Tabla 1: Anexo 1 Contrato 140974

Nombre de archivo	HASH(MD5)	Fecha	Tamaño en bytes
ANEXO 1 2014.pdf	cb9bed9f9d1d110e2ce8374527bd75b4	29/05/2024	263.199

Fuente: Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacifico

Una vez revisado y analizado el anexo 1 aportado por la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacifico, se logró convertir el PDF a Excel. El total de registros del anexo es de 1355. Para la ejecución del mismo la institución subcontrato otras instituciones para la atención de los alumnos, dentro de los cuales estaba el **Centro Docente Mi Pequeña Infancia** para la atención de 155 estudiantes. En reunión con la sustanciadora, con base en el objeto del auto que decreta prueba, se definió revisar la atención de los estudiantes del **Centro Docente Mi Pequeña Infancia**. De acuerdo a lo anterior y con el propósito de verificar la presunta existencia de estudiantes ficticios, fue necesario realizar un cruce de información entre la base de datos de los alumnos inexistentes detectados en la matrícula del Distrito, la información del SIMAT 2014 y el anexo 1.

Como resultado del cruce de las bases de datos, fue posible determinar la existencia de 38 estudiantes a los cuales presuntamente no se les prestó el servicio educativo contratado. Los estudiantes identificados en el ejercicio anterior se encuentran detallados en al archivo *Inexistentes Gimnasio Pacífico - Mi pequeña infancia.xlsx*, y se detallan en la siguiente tabla:

	DOCUMENTO	Validación Nombre	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NO	SEGUNDO	GRADO
1	41948911	GUEARBKEVAND	GUEVARA	ARBOLEDA	KEVIN	ANDRES	-1
2	4102441	MANCANANDFEL	MANCEBO	CANDELO	ANDRES	FELIPE	-1
3	41201493	MONVALLUIGUI	MONTAÑO	VALENCIA	LUIS	GUILLERM	1
4	50821539	GONESTHEN1	GONZALEZ	ESTUPIÑAN	HENRY		1
	DOCUMENTO	Validación Nombre	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NO	SEGUNDO	GRADO
5	43807544	HURGUEGISCHA	HURTADO	GUERRERO	GISELL	CHARLOTT	1
6	41207229	VASCORANACRI	VASQUEZ	CORDOBA	ANA	CRISTINA	1
7	34610647	CAIANGCARYOI	CAICEDO	ANGULO	CARLOS	YOICE	1
8	41207344	CAIVICANDCAM	CAICEDO	VICTORIA	ANDRES	CAMILO	1
9	40699879	GALIBASHAYUL	GALLEGO	IBARGUEN	SHAILA	YULEYSSI	1
10	40510171	SINCASJOSMIG	SINISTERRA	CASTRO	JOSE	MIGUEL	2
11	35110257	SANMENNICVAL	SANCHEZ	MENESES	NICOLL	VALENTINA	2
12	40137163	VERRIAJHOJAN	VERNAZA	RIASCOS	JHON	JANER	2
13	39596161	MOSOLANAIAAND	MOSQUERA	OLAYA	NAIBERSON	ANDRES	2
14	41144133	CALPALVIAKAR	CALERO	PALOMINO	VIANNY	KARINA	2
15	40699571	CANANGLICFER	CANGA	ANGULO	LICETH	FERNANDA	2
16	38976353	RIAMINJOSLUI	RIASCOS	MINA	JOSE	LUIS	2
17	41948241	GUESOLVIVKAR	GUERRERO	SOLIS	VIVIAN	KARINA	2
18	39596354	CIFVALISAAND	CIFUENTES	VALVERDE	ISAAC DAV	ANDRES F	2
19	42119424	MOSHURYEIENR	MOSQUERA	HURTADO	YEINER	ENRIQUE	2
20	44527784	ESTARABILRIC	ESTUPIÑAN	ARAUJO	BILLY	RICHARD	2
21	40510170	RIAANTTIAJAE	RIASCOS	ANTE	TIANNY	JAEL	2
22	1150935368	ANCVALSEB	ANCHICO	VALENCIA	SEBASTIAN		2
23	38110370	ISAHUREDUDAN	ISAZA	HURTADO	EDUAR	DANIEL	3
24	38980471	PATVICJOSLUI	PATÍÑO	VICTORIA	JOSE	LUIS	3
25	39588391	MORGONKIAYET	MORENO	GONZALEZ	KIANNA	YETCELLY	3
26	39221802	DIABORHOLSTI	DIAZ	BORJA	HOLVER	STIVEN	3
27	1806497	PERANGZHADAY	PERLAZA	ANGULO	ZHARICK	DAYANA	3
28	38243303	ARBANGJOHJAD	ARBOLEDA	ANGULO	JOHN	JADER	4
29	39631984	RODMOSSARGIO	RODRIGUEZ	MOSQUERA	SARAY	GIORDARI	4
30	38982341	RIASINNIXDAH	RIASCOS	SINISTERRA	NIXER	DAHIR	4
31	2771583	ANGANGJHOSEB	ANGULO	ANGULO	JHON	SEBASTIAN	4
32	1111743239	GARCARROSVUR	GARCIA	CARABALI	ROSA	YURANI	4
33	40733433	ROMORTJHOMAR	ROMERO	ORTIZ	JHON	MARIO	5
37	1113362264	MURPOSERIDAV	MURILLO	POSSO	ERITH	DAVID	5
38	1,006,200,101	GIRHUR	GIRALDO	HURTADO			5

Con base en lo anterior, se solicitó a la institución por medio del oficio 2024EE0075220 del 23 de abril del 2024 el soporte de la atención de los 38 alumnos, para lo cual debían enviar la siguiente información:

- Ficha de matrícula del año 2014.
- Certificado de notas de las materias cursadas durante el año 2014.
- Copia del documento de identidad de los estudiantes.

La institución dio respuesta por medio de correo electrónico del 10 de mayo del 2024, donde anexó 5 archivos PDF.

Una vez revisada la documentación remitida por la Sra. Sandra Milena Torres Representante Legal de la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico, se evidenció que la información se envió de manera incompleta, algunos soportes coincidían con los apellidos, pero con otros nombres y datos de identificación.

Con base en la revisión y análisis anterior, no fue posible evidenciar con los documentos allegados por la institución, la atención de los 38 estudiantes **de la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico, mediante el Centro Docente Mi Pequeña Infancia**, por lo tanto, el presunto detrimento es por los 38 estudiantes.  
Se adjunta archivo en Excel con el análisis de la información enviada por la institución.”

Por lo anterior, teniendo como fundamento que no se logró demostrar la atención educativa de 38 alumnos, es posible inferir que el contratista no ejecuto las actividades pactadas, no fueron atendidos la totalidad de los niños por los cuales se contrató el servicio educativo, sin embargo, se autorizó el pago total del contrato, por consiguiente, la ausencia de supervisión y la falta de controles en el área de tesorería al momento de autorizar los pagos, generó la pérdida de recursos públicos.

**ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL**

**1. DETERMINACIÓN DEL DAÑO**

El elemento vital de la responsabilidad fiscal es el daño patrimonial al Estado, contemplado en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 así: “Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”.

Al respecto la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, trae el siguiente comentario: “La definición de daño que trae la Ley 610 de 2000, en forma amplia describe una serie de eventos en que se puede ver lesionado el patrimonio público, por ende, los mismos son enunciativos y no taxativos, quiere ello significar, que el detalle de las situaciones no es cerrado, sino que permite al operador jurídico determinar en cada caso en particular la conducta constitutiva de daño.

Así, son varios los fenómenos que pueden causar un daño patrimonial al Estado en términos de la Ley 610 de 2000, siempre que estén de por medio derechos o intereses patrimoniales cuya titularidad jurídica corresponda al Estado. Debe precisarse que, la expresión intereses patrimoniales del Estado se aplica a todos los bienes, recursos y derechos susceptibles de valoración económica cuya titularidad corresponda a una entidad pública. Correlativamente cuando estos intereses o derechos se vulneren y pueda materializarse en lo mismo un contenido económico estaremos frente a un daño patrimonial al Estado.





37	1113362264	MURPOSERIDAV	MURILLO	POSSO	ERITH	DAVID	5
38	1,006,200,101	GIRHUR	GIRALDO	HURTADO			5

Una vez analizada la evidencia entregada por la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico y de acuerdo a los Informes del apoyo técnico, se determina que no se acreditaron los documentos de atención de 38 estudiantes que aparecen como inexistentes, por consiguiente no se logró demostrar la atención educativa de los mismos, circunstancia que permite colegir a este cuerpo colegiado el incumplimiento parcial del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, por cuanto *en cumplimiento al convenio de asociación, la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapata Olivella canceló al Centro Docente Mi Pequeña Infancia, el valor pactado de NOVENTA MIL PESOS (\$90.000) mensuales por alumno atendido, durante DIEZ (10) MESES, por consiguiente en este segundo informe técnico se concluye que el detrimento patrimonial asciende a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$34.200.000) sin indexar por los estudiantes inexistentes, evidenciándose el incumplimiento de las obligaciones de Interventoría y Supervisión, definidas en el Art. 53 de la ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, así como una violación a lo definido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, a la ejecución contractual.*

2. CONDUCTA

El artículo 5 de la Ley 610 de 2000, contempla que la responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

El artículo 1 de la Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal en la siguiente forma: *“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.*

Por su parte, el artículo 3 de la mencionada Ley define la noción de gestión fiscal en los siguientes términos: *“Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.”*

Al respecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C - 840 del 9 de agosto de 2001, Magistrado ponente doctor Jaime Araujo Rentería, ha dicho: *“Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de*

*presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los servidores públicos, al tiempo que contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines del Estado".*

De otra parte, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, contempla: *"Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de este..."*.

En relación con la graduación de la culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal, traemos a colación el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011: **"Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave"**.

Teniendo en cuenta que la Ley 610 del 2000 no dispone una definición de dolo o culpa grave, resulta necesario remitirnos a otras fuentes normativas para analizar si la actuación por parte de un gestor fiscal es dolosa o gravemente culposa para que sea constitutiva de responsabilidad fiscal.

Definición de culpa grave en el Código Civil: **"Artículo 63. Culpa Grave.** *La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo."*

Definición de culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.<sup>1</sup>: **"ARTÍCULO 6.** *Culpa grave. Se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.*

A la luz del régimen establecido en la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal no sólo se predica del gestor fiscal directo, sino de todo aquel que servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo, en consecuencia en el plano de la gestión fiscal discurren tanto los gestores fiscales directos como de quienes intervienen en la misma en el marco de una relación próxima, necesaria y determinante, radican una serie de deberes u obligaciones funcionales que colocan al sujeto implicado en la capacidad de saber y conocer el conjunto de actividades fijadas por el legislador y conforme a las cuales deben adecuar su conducta para la buena administración de los recursos públicos así como para el logro de los propósitos que por virtud de la Constitución y la ley se establezcan como destino de los mismos.

Descendiendo al caso que nos ocupa, es de indicar que participaron en el hecho irregular que en esta investigación se destaca, los servidores públicos que intervinieron en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, en condición de gestores fiscales, esto es, que tuvieron un poder decisorio frente al cumplimiento contractual y participaron en los trámites contractuales en su calidad de ordenadores del gasto del Distrito Especial de Buenaventura, así como el Supervisor del Contrato, por consiguiente, se procede a la imputación de cargos de los presuntos responsables fiscales en su condición de servidores públicos y gestores fiscales en su orden son:

<sup>1</sup> Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

- BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014.
- YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.747.066, Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos y supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014.
- SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014.
- FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO hoy FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA identificado con el Nit No.900.013.293-2 en calidad de prestador de servicios educativos dentro del programa de ampliación de cobertura de la Alcaldía Distrital de Buenaventura en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 03 de marzo de 2014, representada legalmente por SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA identificada con la cédula de ciudadanía No.31.588.511 de Buenaventura (Valle del Cauca)
- CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA identificado con el Nit. No. 900915733-2, en calidad de prestador de servicios educativos dentro del programa de ampliación de cobertura de la Alcaldía Distrital de Buenaventura en cumplimiento del convenio de asociación de fecha 03 de marzo de 2014, representado legalmente por Helder Harvey García Pinillo identificado la cédula de ciudadanía No.76.339.143 de Buenaventura (Valle del Cauca)

Las actuaciones de los servidores públicos en la contratación estatal están sujetas al cumplimiento de los principios, deberes y responsabilidades consagrados en la Ley 80 de 1993 norma bajo cuya vigencia se suscribió el Contrato, que al respecto consagra:

**“Artículo 3. De los Fines de la Contratación Estatal.** Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

**“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales:** Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante (...)

4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. (...)

**Artículo 14. De los Medios que Pueden Utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual.** Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (...)

**Artículo 23. De los Principios en las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales.** Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.



**Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad.** En virtud de este principio:

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ella. (...)
3. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

La conducta activa u omisiva, imputable al autor del daño, dolosa o culposa, no se refiere a la potestad funcional, reglamentaria o contractual de un servidor público gestor fiscal directo, sino de todos aquellos servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de un daño al patrimonio del Estado.

En este sentido, es aquel comportamiento que es contrario a derecho, para el caso del proceso de responsabilidad fiscal una conducta es antijurídica cuando la persona que maneja fondos o bienes públicos actúa de manera tal que ocasiona pérdidas, mermas o deterioros al patrimonio que le ha sido confiado, en forma dolosa o culposa.

- **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DEL PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 140974 del 3 de marzo de 2014. De acuerdo con el Manual Específico y de Competencias Laborales Para los Empleos de la Planta de Personal de la Alcaldía De Buenaventura, tenía entre sus funciones esenciales, ser el representante político, administrativo y legal del Municipio ante las diferentes instancias del orden Departamental y Nacional, dirigiendo sus actuaciones y las de la Administración Municipal en procura de lograr el bienestar y desarrollo de la comunidad.

*Funciones específicas:*

*Corresponde al Alcalde, en el cumplimiento de las competencias y autorizaciones dadas en la Constitución, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador del Departamento.*

- A. *En relación con el Concejo:*
  2. *Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales.*
- C) *En relación con la Nación, al Departamento y a las autoridades jurisdiccionales:*
  2. *Coordinar y supervisar los servicios que presten en el municipio entidades nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.*
- D) *En relación con la Administración Municipal:*
  1. *Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.*
  4. *Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.*

- 6. *Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar los actos necesarios para su administración.*
- 9. *Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia.*
- 19. *Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria;*

- E) *Con relación a la Ciudadanía:*
- 1. *Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de la oficina de prensa de la Alcaldía.*

Bajo este marco funcional, el Alcalde Distrital, adquirió las obligaciones y responsabilidades entre ellas la de ejercer el control y dirección a la prestación del servicio educativo, que incluía el servicio de ampliación de cobertura educativa, en la búsqueda de alcanzar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Acorde con las funciones del cargo, le asistía una responsabilidad legal y contractual de control, dentro del marco de la gestión fiscal por el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, por su calidad, enmarcada dentro del ejercicio fiscal como gestor fiscal.

En virtud al Contrato No.140974 de 2014 materia de investigación, tenemos que las obligaciones del contratante son:

*“CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO CONTRATANTE: Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y la naturaleza de este tipo de contrato, el DISTRITO CONTRATANTE contrae las siguientes obligaciones por la firma del presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos: a.- Cancelar al CONTRATISTA el valor del precio del Contrato en la forma y términos acordados en este instrumento. b.- Establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento, supervisión, control y vigilancia del presente Contrato. c.- Realizar la evaluación del Servicio Educativo prestado por el CONTRATISTA. d.- Exigir que en desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales vigentes sobre el Servicio Educativo y los fines que persigue con la contratación de este Servicio Público. e. – Vigilar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones que contrae por la firma del presente contrato. f. – Establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento y control del presente contrato, así como realizar la verificación del servicio educativo prestado. g.- Verificar el levantamiento del Acta de inicio de la ejecución del Contrato y las vigencias de las pólizas que garantizan su cumplimiento. i. – Las demás establecidas por la Ley”.*

Se omitió el cumplimiento del Contrato que el mismo suscribió y que le determinaba la obligación de pago con previa verificación de los estudiantes efectivamente atendidos, obligación contractual que no fue aplicada para efecto de los pagos que involucraba recursos del SGP, puesto que procedió a ordenar los pagos sin comprobar el cumplimiento de esta exigencia, por lo tanto se efectuaron los pagos sin verificación de los alumnos beneficiarios del servicio educativo, situación que dio lugar a pagos injustificados, sobre los cuales le asistía la responsabilidad de actuar con mayor diligencia y cuidado, omisión que evidencia la falta de control al proceso de supervisión y verificaciones a las que estaba legal y contractualmente obligado, bien sea directamente o por intermedio de los funcionarios, de lo que se evidencia las fallas en el ejercicio de un control adecuado.

Conforme al soporte probatorio legalmente allegado al Proceso se establece que durante el periodo de gestión, tuvo lugar la ocurrencia de irregularidades relacionadas con el pago por concepto de estudiantes inexistentes, en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, sin haber prestado el servicio educativo de ampliación de cobertura, que origina una presunta responsabilidad fiscal del entonces servidor público, al establecerse que incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones, al determinarse que autorizó pagos al Contratista.

De acuerdo con las circunstancias expuestas, el Despacho considera tal proceder como una omisión en el ejercicio de sus funciones que originó el detrimento patrimonial correspondiente al irregular control ejercido a la ejecución del Contrato, que estuvo a su cargo, por lo tanto, la conducta desplegada, contiene los elementos suficientes para encuadrarse dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, la que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es: *“La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios...”*

La conducta de este funcionario consistió en autorizar los pagos del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No.140974 del 3 de marzo de 2014, a La Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 34.200.000)**, sin existir soporte del cumplimiento total del objeto contractual, sin ejecutar acciones pertinentes en forma diligente para hacer cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Contractual.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.469.636, en su calidad de Alcalde Distrital para la época de los hechos, se puede calificar como gravemente culposa, al autorizar los pagos, sin soportes o evidencias del cumplimiento total del Contrato, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, surge en virtud del ejercicio de la función pública que desempeñó, que le determinaban la responsabilidad de dirección, control y supervisión frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de control y vigilancia en la prestación del servicio educativo, en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, de ampliación de cobertura, consistente en ejercer los medios administrativos y legales a su alcance para el cumplimiento de los objetivos contractuales, medidas que no fueron adoptadas, omisión que contribuyó de manera determinante a la causación del daño patrimonial, por tal motivo, esta instancia le imputara responsabilidad fiscal a título de culpa grave por su omisión que contribuyó a la materialización del detrimento fiscal.

El artículo 48 de la Ley 610 de 2000 establece como presupuesto para imputar responsabilidad fiscal, el haberse demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado establecido mediante los medios probatorios idóneos, que en el presente caso lo constituyen el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. No. 140974 del 3 de marzo de 2014, autorizaciones de pago, Comprobantes de egreso, Informes de supervisión, formatos de registro de cupos no utilizados, fichas de matrícula, certificados de estudio, documentos de identificación, Informe técnico, pruebas testimoniales, elementos que, de acuerdo con las consideraciones referidas en precedencia, permiten establecer que en los hechos investigados se configura detrimento de recursos públicos.

Es claro que existe un detrimento patrimonial al Estado, en consecuencia, objetivamente se encuentra demostrado el daño al patrimonio económico del Sistema General de Participaciones SGP, asignados para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, en

cuantía atribuible al presunto responsable, sin indexar por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 34.200.000)**.

- **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DE LA PRESUNTA RESPONSABLE FISCAL YENNY MARIA ANGULO QUINTANA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, era la Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, y fungió como Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, entre el Distrito Especial de Buenaventura y La Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapata Olivella, por lo tanto, es necesario precisar lo siguiente:

La ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: “...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia.

Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el

*cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”*

- Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

*“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:  
(...)*

*9. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”*

- Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

*“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*

*1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”*

- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

*“Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:*

*1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*

*(...)*

*2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.*

*(...)*

*4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”*

*Artículo 82. de la ley 1474 de 2011. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.*

*Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades,*

derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

Sea lo primero indicar que el supervisor y el interventor, tiene la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tenga el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de la interventoría.

En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de los supervisores, la Ley 80 de 1993 exigió que al hablarse de ellos se tratara de personas independientes a la Entidad contratante y al Contratista, el cual tiene la obligación de responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Dado lo cual, la supervisión debe realizar siempre un seguimiento serio y objetivo sobre el desarrollo del contrato sobre el cual ejerce sus funciones, so pena, de responder civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el incumplimiento u omisiones de sus tareas como por las omisiones correspondientes siempre y cuando éstas causen daños y perjuicios no sólo a la entidad contratante, sino a la sociedad en general.

En este sentido, para profundizar sobre las funciones y responsabilidad de la supervisión, es preciso señalar que el artículo 83 y el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, establece una definición en los siguientes términos:

**“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (...)”

**Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.** La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”

En atención a lo anterior, resulta claro que el supervisor tiene la tarea de llevar a cabo un seguimiento, en principio técnico, que puede, por disposición de la Entidad contratante, ampliarse en el seguimiento administrativo, financiero, contable y hasta jurídico y ambiental.

Dentro de las obligaciones de la supervisión, se encuentra las de exigir al contratista, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier situación que pueda configurar un incumplimiento del objeto contractual. Al respecto el artículo 84

parágrafo 1 de la Ley 1474 de 2011 establece como falta: *“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, contrato que no ha sido ejecutado a cabalidad”*.

De acuerdo con la Cláusula Decima Segunda del Contrato de Prestación de Servicios Educativos, Supervisión: las labores de seguimiento y control al estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que se deriven del presente contrato serán ejecutadas por la Secretaria de Educación Distrital y/o por la interventoría que llegare a ser contratada por el Distrito. El supervisor y/o interventor será el responsable de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.

Como se puede observar, por parte de la Secretaria de Educación, no hubo el mínimo cuidado, supervisión o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado. Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente 0contractual no se encontraron evidencias del seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero que debía realizar el Supervisor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas en la cláusula mencionada para la supervisión e interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del contrato.

En su condición de supervisor del contrato omitió la revisión y verificación de la ejecución de este. Además, no existe evidencia de acciones que denoten el ejercicio de la supervisión, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo de YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, se encontraba una responsabilidad de supervisar y exigir el buen uso de los recursos público, es decir, que estos cumplieran con una finalidad social, y al no observarse dicha actuación de supervisión, se generó una responsabilidad frente a la ejecución de este, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar como gestor fiscal.

El reproche fiscal se encuentra sustentado ya que en cabeza de YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, quien actuó como supervisora, se encontraba la representación del Municipio y por tanto tenían a su cargo la salvaguarda de los recursos públicos invertidos con el fin de que estos cumplieran el cometido estatal encomendado.

La conducta mencionada contiene los elementos suficientes para encajar dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

De otra parte la mencionada conducta encuadra en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001 tal como se hizo alusión en líneas precedentes consistente en: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es con secuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

Adicionalmente la Ley 1474 de 2011 establece en el artículo 118 que se presume la culpa grave: (...) c) *Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas*. Para el presente caso se tiene que se omitió las obligaciones propias de supervisión al no revisar la adecuada prestación del servicio educativo del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 140974 del 3 de marzo de 2014, pues de haberse realizado se hubiera detectado que se estaba pagando por cupos a los cuales no se les prestó el servicio educativo y se hubiera evitado el presunto daño patrimonial detectado en la presente investigación.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, Secretaria de Educación del Distrito y Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 140974 del 3 de marzo de 2014, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones como Secretaria de Educación del Distrito y Supervisora del Contrato en comento, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, en ejercicio de la función pública, con funciones asignadas de supervisor para la época de los hechos, que le determinaban la responsabilidad frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de seguimiento y verificación en la contratación de ampliación de cobertura, surge en virtud de ejercer un inadecuado proceso de supervisión, pues certificó como Supervisor que el Contrato se había ejecutado a entera satisfacción de las partes, lo cual incidió de manera directa en la pérdida de recursos, pues conforme con dicha aprobación avaló el pago del Contrato, sin advertir que se habían cancelado unos recursos por concepto de alumnos inexistente, configurándose de esta manera, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, una gestión que no corresponde al cumplimiento de los cometidos estatales, razón por la cual se le llama a responder a título de culpa grave en cuantía no indexada de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 34.200.000)**.

- **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DE LA PRESUNTA RESPONSABLE FISCAL SONIA SEGURA SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, en calidad de Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, es necesario precisar lo siguiente:

La ley 80 de 1993 *“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”*, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: *“...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia.*



*Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)*

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

*“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”*

- Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

*“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:*  
(...)

*9. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”*

- Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

*“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*

- 1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”*
- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

*“Artículo 26. Del Principio De Responsabilidad. En virtud de este principio:*

- 1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*
- (...)
- 2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.*
- (...)
- 4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”*

*Artículo 82. de la ley 1474 de 2011. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.*

*Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.*

Sea lo primero indicar que el supervisor y el interventor, tiene la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tenga el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de la interventoría.

En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de los supervisores, la Ley 80 de 1993 exigió que al hablarse de ellos se tratara de personas independientes a la Entidad contratante y al Contratista, el cual tiene la obligación de responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Dado lo cual, la supervisión debe realizar siempre un seguimiento serio y objetivo sobre el desarrollo del contrato sobre el cual ejerce sus funciones, so pena, de responder civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el incumplimiento u omisiones de sus tareas como por las omisiones correspondientes siempre y cuando éstas causen daños y perjuicios no sólo a la entidad contratante, sino a la sociedad en general.

En este sentido, para profundizar sobre las funciones y responsabilidad de la supervisión, es preciso señalar que el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, establece una definición en los siguientes términos:

**“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (...)”

**ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.** La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”

En atención a lo anterior, resulta claro que el interventor tiene la tarea de llevar a cabo un seguimiento, en principio técnico, que puede, por disposición de la Entidad contratante, ampliarse en el seguimiento administrativo, financiero, contable y hasta jurídico y ambiental.

Dentro de las obligaciones de la interventoría, se encuentra las de exigir al contratista, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier situación que pueda configurar un incumplimiento del objeto contractual. Al respecto el artículo 84 parágrafo 1 de la Ley 1474 de 2011 establece como falta:

*“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, contrato que no ha sido ejecutado a cabalidad”.*

Como se puede observar, por parte de la Interventora, no hubo el mínimo cuidado, o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado. Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente contractual no se encontraron evidencias de la vigilancia y control de la correcta iniciación y ejecución que debía realizar el Interventor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas para la interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del contrato.

En su condición de Interventora del contrato omitió la revisión y verificación de la ejecución del mismo. Además, no existe evidencia de acciones que denoten el ejercicio de la interventoría, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

La conducta mencionada contiene los elementos suficientes para encajar dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

De otra parte la mencionada conducta encuadra en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001 tal como se hizo alusión en líneas precedentes consistente en: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es con secuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

Adicionalmente la Ley 1474 de 2011 establece en el artículo 118 que se presume la culpa grave: (...) c) *Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas*. Para el presente caso se tiene que se omitió las obligaciones propias de supervisión al no revisar la adecuada prestación del servicio educativo del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141005 del 3 de marzo de 2014, pues de haberse realizado se hubiera detectado que se estaba pagando por cupos a los cuales no se les prestó el servicio educativo y se hubiera evitado el presunto daño patrimonial detectado en la presente investigación.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo de SONIA SEGURA SANCHEZ, se encontraba una responsabilidad de realizar seguimiento y exigir el buen uso de los recursos público, es decir, que estos cumplieran con una finalidad social, y al no observarse dicha actuación de vigilancia, se generó una responsabilidad frente a la ejecución de este, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar como gestor fiscal.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por SONIA SEGURA SANCHEZ, Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 140974 del 3 de marzo de 2014, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones como Interventora del Contrato en comento, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, en ejercicio de la función pública, con funciones asignadas de supervisor para la época de los hechos, que le determinaban la responsabilidad frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de seguimiento y verificación en la contratación de ampliación de cobertura, surge

en virtud de ejercer un inadecuado proceso de supervisión, pues certificó como Supervisor que el Contrato se había ejecutado a entera satisfacción de las partes, lo cual incidió de manera directa en la pérdida de recursos, pues conforme con dicha aprobación avaló el pago del Contrato, sin advertir que se había cancelado unos recursos por concepto de alumnos inexistente, configurándose de esta manera, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, una gestión que no corresponde al cumplimiento de los cometidos estatales, razón por la cual se le llama a responder a título de culpa grave en cuantía no indexada de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 34.200.000).**

- **ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DEL PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO hoy FUNDACION MANUEL ZAPARA OLIVELLA**, identificado con Nit No.9000132293-2, representado legalmente por SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA identificada con la cédula de ciudadanía No.31.588.511 de Buenaventura (Valle del Cauca), Contratista en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, establecimiento educativo que a su vez realiza el convenio de asociación con la institución privada CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA identificado con Nit No.9009157332 representado legalmente por HELDER HARVEY GARCIA PINILLO identificado con la cédula de ciudadanía No.76.339.143 de Buenaventura (Valle del Cauca), para que preste los Servicios Educativos dentro del programa de Ampliación de Cobertura Educativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, vigencia 2014, de lo cual es necesario precisar lo siguiente:

La Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapata Olivella, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, y a su vez realiza el Convenio de asociación con varias subsedes entre ellas el Centro Docente Mi Pequeña Infancia, por lo tanto tenemos que como extremo contractual ambos son beneficiarios de unos recursos públicos con ocasión de una interrelación con la actividad administrativa del Estado, y se convierten en colaboradores de la función desempañada por este, a través de un Contrato, con lo cual se someten a las reglas de derecho público para la contratación estatal y las finalidades constitucionales de sus recursos propendiendo por el beneficio general y social, principio que en la Ley 80 de 1993 adquiere un papel central, pues el Estado garantiza a los particulares su beneficio económico o utilidad al momento de contratar, pero conforme a una carga social y destinación concreta de los recursos públicos, y también dentro de la etapa contractual presenta una posición a la administración que somete a su consideración y aprobación bajo los principios o condicionamientos que la misma le imponga, como precio, plazo y demás que son objeto del ámbito contractual, pero no se permite bajo ninguna circunstancia provecho indebido o abusivo de la relación contractual que llegue a atentar o menoscabar los recursos públicos.

La ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó:

*“...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia. Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas*

*encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fines estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)*

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

*“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”*

- Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

*“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:*

- (...)*
9. *Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”*

- Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

*“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*

1. *Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización*

*o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”*

- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

*“Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:*

*1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*

*(...)*

*2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.*

*(...)*

*4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”*

*“Artículo 5. De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:*

*1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.*

*(...).*

*2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse.*

*(...).*

*4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.”*

Las citadas normas nos conducen a establecer de forma clara e inequívoca que el Contratista además de ser un tercero que entra a cumplir con la ejecución contractual en una Entidad, se convierte en un colaborador del Estado en su función social, generando a este una obligación universal de lograr el cometido que es, el generar un beneficio social a través del contrato estatal celebrado, por consiguiente; debe actuar de la mejor manera para el cumplimiento del logro, de tal suerte que analizadas las pruebas documentales y técnicas que se aportaron al Expediente, podemos advertir que La Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapata Olivella, no ejecutó las actividades para las que estaba obligado en virtud de la relación contractual, derivadas del Contrato No.140974 mediante el cual se obligaba a:

**“...SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** *El contratista se obliga entre otros a lo siguiente: a.- Prestar el Servicio Educativo Formal a los estudiantes beneficiarios del Programa de Ampliación de Cobertura reportados en el SIMAT que pertenecen al grupo de población clasificada como de estratos socioeconómicos 1 y 2 y niveles 1, 2 y 3 del SISBEN del Distrito de Buenaventura y que están relacionados en el Anexo 1 de este Contrato, de conformidad con las directrices y lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Distrital, utilizando el establecimiento educativo a nombre del cual contrata en su calidad de representante legal. b.- Asumir con los valores del precio del contrato, los costos de los elementos que hacen parte de la Canasta Educativa ofrecida. c.- Reportar al Distrito de Buenaventura por medio escrito y en el Aplicativo SIMAT, los retiros de los alumnos beneficiarios indicando el motivo de los mismos. d.- Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre el Servicio Educativo. e.- Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento, supervisión, control y vigilancia que adopte el Distrito de*

 <b>CONTRALORÍA</b> General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 40 de 47
<b>AUTO No.                      IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00737</b>	

Buenaventura. f.- Aportar oportunamente la información o documentación que el Distrito de Buenaventura, el Ministerio de Educación Nacional, el Director de Zona Educativa o la interventoría del Programa designada por el CONTRATANTE, requieran para evaluar la buena ejecución del Contrato. g. Presentar la garantía (mica exigida a través de póliza de seguro tomada en entidad aseguradora legalmente constituida. h.- inhibirse de adelantar cobros adicionales o pactar con los padres de familia o representantes de los educandos toda clase de cobros por la prestación del Servicio Educativo que ha sido contratado, durante la vigencia del Periodo Lectivo 2014. i.- Mantener su autonomía e independencia en la ejecución del objeto del Contrato y la relación con quienes decida contratar para la ejecución del mismo. j.- Establecer mecanismos que busquen garantizar la permanencia de los beneficiarios del subsidio en los establecimientos de servicios educativos durante el Calendario Escolar. k.- Aportar oportunamente la información o documentación que el contratante requiera con relación el lapsa de tiempo transcurrido de ejecución efectiva del servicio educativo prestado. 1.- Liberar al Distrito de Buenaventura - Secretaria de Educación – de responsabilidad por hechos, acciones, operaciones u omisiones que con ocasión del servicio público educativo prestado ejecuten o hayan ejecutado, tanto el contratista como sus dependientes y relacionados, así como garantizar la inexistencia de cualquier vínculo jurídico contractual y/o laboral entre el contratista y/o el personal que hubiese utilizado para prestación del servicio que hoy se transa. m.- Garantizar que los alumnos beneficiarios del subsidio y atendidos por el marco del proyecto de ampliación de cobertura mediante la contratación del servicio educativo con entidades no estatales del distrito de Buenaventura, puedan continuar recibiendo la atención educativa hasta la terminación del año lectivo, en solución de continuidad y lograr su promoción de conformidad con la normatividad vigente. n. Cancelar cumplidamente al personal docente, directivo y a las instituciones educativas con las cuales el contratista haya celebrado convenios privados de asociación para la prestación del servicio educativo. o. Rendir Oportunamente los informes requeridos por la Secretaria de Educación Distrital, el interventor y/o el Ministerio de Educación Nacional. p. Adquirir en cualquier compañía aseguradora la póliza de seguro estudiantil de los **1.355** alumnos Beneficiarios que se encuentran relacionados en el documento denominado "Anexo 1". q. Desarrollar los programas curriculares y planes de estudio de los grados y niveles determinados en el Proyecto Educativo Institucional o el Proyecto Educativo Comunitario de cada establecimiento educativo, con el fin de prestar adecuadamente el servicio educativo. r. Establecer mecanismos que busquen garantizar la permanencia de los beneficiarios en los establecimientos educativos, durante todo el año lectivo; s. Promover a los alumnos de acuerdo con lo dispuesto en la ley. t. Reportar a la Secretaria de Educación y/o al supervisor del contrato, los soportes de 0 inasistencia de los estudiantes beneficiarios. La no presentación del reporte conlleva la pérdida del cupo escolar. u. El contratista no podrá asignar los cupos que se generen por el retiro de estudiantes beneficiarios o graduados. v. Cumplir con los Planes de mejoramiento que arrojen las visitas de seguimiento por parte de la entidad territorial y/o la interventoría, so pena de incurrir en incumplimiento de contrato y generar la terminación inmediata del mismo. w. Todas las demás obligaciones necesarias para la integral ejecución del objeto contratado..."

Obligaciones que la Entidad contratante incumplió.

Es menester precisar en que los contratistas del Estado son sujetos de control fiscal cuando quiera que manejan bienes o fondos públicos y tal gestión se materializa en el hecho de que el contratista al entrar a negociar con la administración, los términos y obligaciones del contrato y comprometerse específicamente a cumplir con lo pactado, ejerce actos de conexidad próxima con el ejercicio de la gestión fiscal, máxime si se tiene en cuenta que se le entregaron unos recursos en calidad de pagos, que son de carácter público, razón por la cual, su manejo y custodia debe estar inmerso dentro de las obligaciones de un verdadero gestor fiscal, ya que son unos recursos públicos que han sido destinados para cumplir un fin social y como tal le asiste el deber de actuar con lealtad y honestidad a lo largo de toda su participación como Contratista, observando los principios de transparencia, economía y responsabilidad en aras de salvaguardar los recursos del Estado.

La conducta del Contratista se materializa al momento de celebrar el Contrato estatal y de recibir unos recursos en calidad de pago, los cuales, si no son invertidos en su totalidad en el objeto contractual da lugar a derivarle responsabilidad fiscal, al



apropiarse de unos recursos públicos que legalmente no le pertenecían por cuanto no se verificaron, actas e informes de supervisión, evidencias fotográficas, planillas de asistencias, o avance del proceso contractual.

Con su conducta el Contratista, incurrió en una manifiesta violación a los deberes contractuales estipulados expresamente en las Obligaciones del Contratista, así como los principios y deberes de los contratistas consagrados en el Estatuto de la contratación estatal Ley 80 de 1993 que prevé como fin de la contratación estatal respecto de los particulares:

**Artículo 3. De los Fines de la Contratación Estatal.** “(...) Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

**Artículo 5.** consagra los derechos y deberes de los contratistas. “Para la realización de los fines de que trata el artículo 3, de esta ley, los contratistas: (...) 2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse. (...)

4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. (...)

De acuerdo con el material probatorio obrante en el Expediente, La Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapata Olivella y El Centro Docente Mi Pequeña Infancia, faltaron a su deber de obrar con lealtad respecto de la Entidad a la cual prestaron sus servicios como contratistas, lo que generó un provecho económico injustificado para sí, un menoscabo patrimonial, que se considera una actitud antieconómica en contra de los fines del Estado.

Con dicha conducta transgredió toda la normatividad tendiente al adecuado manejo de los recursos públicos y también las propias de la administración y la moralidad pública.

De acuerdo con lo anterior y confirmada la relación contractual entre el DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (Contratante) y la FUNDACION GIMANSIO COOPERATIVO DEL PACIFICO hoy FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA (Contratista), este Despacho considera que para el CONTRATISTA se configura el título de culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone: “*Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.*”

En su calidad de CONTRATISTA es responsable a título de culpa grave, por el detrimento patrimonial causado por haber recibido a satisfacción el pago del mismo pese a no haber realizado la debida ejecución del contrato, puesto que desde que se inició la ejecución del contrato no ha justificado la inversión de estos recursos en las actividades que se contrataron, por consiguiente se le imputará en su contra responsabilidad fiscal, lo anterior teniendo en cuenta el incumplimiento del Contrato y de la normatividad en materia contractual.

La conducta desplegada por el Contratista contiene los elementos suficientes para encuadrarse dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, la que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil: “*La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios...*”

De igual manera la conducta mencionada encaja en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, que preceptúa: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el Contratista FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO Hoy FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA, y por extensión el CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA, incurrieron en una manifiesta violación a los deberes contractuales estipulados expresamente en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, así como los deberes de los contratistas consagrados en el Estatuto de la contratación estatal Ley 80 de 1993, por lo cual son presuntos responsables fiscales por su conducta gravemente culposa en su condición de Contratistas, al contravenir los términos pactados así como las obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal mencionadas, a las cuales se sustrajeron por haber incurrido en apropiación de recursos públicos no ejecutados, conducta ajena a las finalidades del servicio del Estado que dio lugar al detrimento patrimonial del Estado Colombiano representado en los recursos recibidos, sujetos a devolución en el evento de no ser ejecutados.

Ahora bien, se debe advertir que los pagos realizados en el marco de una relación contractual son una retribución de una obligación cumplida y teniendo en cuenta que en el presente asunto el Contratista recibió el pago de recursos por cupos a los que no se les prestó el servicio, constituye una administración fiscal irregular y antieconómica, en el ámbito de la responsabilidad fiscal, tal como lo dispone el artículo 4 Ley 610 de 2000.

En este orden de ideas, siendo la responsabilidad legal y contractual de FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO Hoy FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA, el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No.140974 del 3 de marzo de 2014, tal como estaba estipulado, en consecuencia, se le imputara responsabilidad fiscal a título de culpa grave, materializándose el detrimento fiscal en cuantía no indexada de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 34.200.000)** valor que corresponde a los recursos desembolsados por la Administración municipal por concepto del pago de cupos no atendidos.

**NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y LA CONDUCTA**

El nexo causal entre la conducta de la Fundación Gimnasio Cooperativo del Pacífico hoy Fundación Manuel Zapata Olivella y el Centro Docente Mi Pequeña Infancia y, el detrimento ocasionado al Distrito Especial de Buenaventura es evidente pues como Contratistas en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, no cumplieron con las obligaciones contractuales, prestando la atención a estudiantes beneficiarios del programa de ampliación de cobertura educativa, con instituciones del sector privado inscritas en el banco de oferentes del Distrito Especial de Buenaventura, para la vigencia lectiva 2014, por lo que se demuestra la relación causa efecto entre la conducta y el resultado de esta, es decir, el detrimento que se produjo al erario del Distrito Especial de Buenaventura, está debidamente probada la no ejecución del objeto contractual.

Respecto a los presuntos responsables BARTOLO VALENCIA RAMOS, YENNY MARIA ANGULO QUINTANA y SONIA SEGURA SANCHEZ, se establece el nexo causal entre su conducta y el daño, en el sentido que eran las personas llamadas a

 <b>CONTRALORÍA</b> General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 43 de 47
<b>AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00737</b>	

realizar seguimiento, control, verificación y exigencia del cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, sin embargo, al no cumplir cabalmente con sus funciones permitieron que se ocasionara el detrimento del Distrito Especial de Buenaventura, al no haberse ejecutado totalmente el objeto contractual; no cumplir con sus funciones respecto a este Contrato de Prestación de Servicios Educativos, permitió que el Contratista incumpliera con la ejecución de la totalidad del objeto contratado sin ninguna justificación.

La revisión de los documentos mencionados conlleva a que, de la valoración integral de las pruebas a partir del Auto No. 511 del 20 de agosto del 2019 y los informes técnicos practicados, se entienda que, el reproche fiscal debe ser abordado, en la calificación de las condiciones materiales que dieron lugar al no cumplimiento total del objeto contractual.

Por lo anterior, esta Colegiatura, proferirá imputación de responsabilidad fiscal contra BARTOLO VALENCIA RAMOS, YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, SONIA SEGURA SANCHEZ, LA FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO hoy FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA Y EL CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA.


Así las cosas, al confluir en el presente caso los requisitos señalados en el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, por estar objetivamente demostrado el daño al patrimonio económico del Estado y existir medios probatorios que comprometen su responsabilidad fiscal, los suscritos directivos de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, imputarán responsabilidad fiscal en forma solidaria en cuantía, sin indexar, de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 34.200.000)**

**DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**

De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, fue vinculada a presente Proceso de Responsabilidad Fiscal en calidad de Tercero Civilmente Responsable Fiscal, a la aseguradora **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2, al expedir al expedir Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial No. 300010, expedida el 27 de enero de 2015 con vigencia desde el 27 de enero de 2015 hasta el 23 de enero de 2016, tomador Distrito Especial de Buenaventura, identificado con el Nit. No. 890.399.045-3, asegurado Bartolo Valencia Ramos identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, por el riesgo amparado: Fallo con Responsabilidad Fiscal, por un valor asegurado de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000). Comunicada al Representante Legal de la aseguradora mediante Oficio No. 2019EE0104756 del 26 de agosto del 2019.

Respecto a esta póliza, se debe mantener su vinculación al presente Proceso, teniendo en cuenta que hubo incumplimiento y omisiones en las funciones a cargo los funcionarios vinculados al Proceso del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, que a la postre desencadenó en un daño, por lo que están llamadas a responder por el detrimento ocasionado. Es esta póliza la que brinda el respaldo para que se lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, debe ser ella quien se haga responsable de los pagos a realizar, es quien minimiza el impacto en caso de que el contratista incurra en incumplimiento de cualquiera de los acuerdos establecidos en el contrato.

**INSTANCIA DEL PROCESO**

 <b>CONTRALORÍA</b> General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 44 de 47
<b>AUTO No.                    IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00737</b>	

El Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 contempla: *“**Instancias.** El proceso de responsabilidad será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o **de imputación de responsabilidad fiscal, según el caso,** sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada”*.  
Negritas y subrayas fuera de texto.

De acuerdo con la Resolución del 14 de febrero 2015, certificación expedida por el Distrito Especial de Buenaventura, en la que se indica que para el año 2015 la menor cuantía para contratar estaba fijada en \$ 418.827.500 y considerando que la cuantía sin indexar del daño patrimonial asciende a **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 34.200.000)** puede determinarse que el proceso de responsabilidad fiscal que nos ocupa se tramitará en única instancia, toda vez que el valor del detrimento patrimonial corresponde a valor que no supera la menor cuantía para contratación del Distrito Especial de Buenaventura–Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura para la vigencia 2014.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **LOS DIRECTIVOS COLEGIADOS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,**

**RESUELVEN**

**PRIMERO: IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL** de forma solidaria, a título de culpa grave, dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-2019-00737, que se adelanta con ocasión del daño patrimonial causado a los intereses patrimoniales del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, por la suma no indexada de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$34.200.000)**, según se expuso en la parte motiva de este proveído, en contra de:

- **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, Alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 140974 del 3 de marzo de 2014.
- **YENNY MARIA ANGULO QUINTANA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 140974 del 3 de marzo de 2014.
- **SONIA SEGURA SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, Interventora del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014.
- **FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO hoy FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA** identificado con el Nit. No. 900.0132293-2, representado legalmente por SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA identificada con la cédula de ciudadanía No.31.588.511 de Buenaventura (Valle del Cauca), contratista en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, establecimiento educativo que a su vez mediante convenio de asociación, contrata a la institución privada Centro Docente Mi Pequeña Infancia para prestar los servicios educativos dentro del programa de Ampliación de Cobertura Educativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, vigencia 2014.
- **CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA** identificado con Nit. No. 9009157332 representado legalmente por HELDER HARVEY GARCIA PINILLO identificado con la cédula de ciudadanía No.76.339.143 de Buenaventura (Valle del Cauca) contratado por la FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO hoy FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA con ocasión del convenio de asociación suscrito en virtud al Contrato de Prestación de Servicios

 <b>CONTRALORÍA</b> General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 45 de 47
<b>AUTO No. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00737</b>	

Educativos No. 140974 del 3 de marzo de 2014, para prestar los servicios educativos dentro del programa de Ampliación de Cobertura Educativa de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, vigencia 2014.

**SEGUNDO: MANTENER** en calidad de tercero civilmente responsable a **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2, al expedir al expedir Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial No. 300010, expedida el 27 de enero de 2015 con vigencia desde el 27 de enero de 2015 hasta el 23 de enero de 2016, tomador Distrito Especial de Buenaventura, identificado con el Nit. No. 890.399.045-3, asegurado Bartolo Valencia Ramos identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, por el riesgo amparado: Fallo con Responsabilidad Fiscal, por un valor asegurado de CIENT MILLONES DE PESOS (\$ 100.000.000), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO: TRAMITAR** en única instancia el Proceso Ordinario de Responsabilidad No. PRF-2019-00737, en atención al artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 y lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

**CUARTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE** la presente providencia a los implicados y a sus apoderados de oficio, quienes se pueden localizar en las siguientes direcciones:

- **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, quien se puede ubicar en el Cosmos Pacifico Hotel Calle 3 No. 1A - 57 Habitación 1605; a su apoderado de confianza **JORGE TULIO RIASCOS HURTADO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.16.494.165 de Buenaventura (Valle del Cauca), en la Calle 5A No. 41b-49 Buenaventura, Teléfono:3174778039, apoderado de oficio **MARTIN CUELLAR ROMERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.005.893.052, al correo electrónico: mcuellarr1@correo.usbcali.edu.co teléfono: 3174254355
- **YENNY MARIA ANGULO QUINTANA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, quien se puede ubicar en el COJAM - Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí – ubicado en Kilometro 2.7 vía Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca, donde se encuentra recluida y a su apoderada de oficio **VICTORIA ANDREA GONZALEZ HURTADO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.144.195.526, al correo electrónico: vagonzalezh@correo.usbcali.edu.co Teléfono: 3163776145
- **SONIA SEGURA SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, notificar en el correo electrónico sonia\_s\_s@hotmail.com y a su apoderado de oficio **ANGEL GABRIEL ANGULO PEREZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.109.660.011, al correo electrónico: agangulop@correo.usbcali.edu.co, teléfono: 3174254355.
- **FUNDACION GIMNASIO COOPERATIVO DEL PACIFICO** hoy **FUNDACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA** identificado con Nit No. 9000132293-2, representado legalmente por **SANDRA MILENA TORRES MOSQUERA** identificada con la cédula de ciudadanía No.31.588.511 de Buenaventura (Valle del Cauca), quien se puede ubicar en la Carrera 82 Calle 52 No. 2-03, Barrio El Ruiz, Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca), al correo electrónico: samitorres18@hotmail.com, teléfono: 3187150035 y a su apoderada de oficio **SARA VALENTINA OBANDO LOPEZ** identificada con la cedula de ciudadanía No.1.104.216.817, correo electrónico: svobandol@correo.usbcali.edu.co Teléfono: 3017563873
- **CENTRO DOCENTE MI PEQUEÑA INFANCIA** identificado con Nit. No. 9009157332 representado legalmente por **HELDER HARVEY GARCIA PINILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.339.143 de Buenaventura (Valle del Cauca) notificar en la Carrera 61 No.1 Sur-22 B/ El Carmen Distrito de

Buenaventura (Valle del Cauca), al Correo electrónico: m\_infancia@hotmail.com , teléfono: 3163015180 y a su apoderado de oficio **DANIEL ESTRADA DIAZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.105.891.920, estudiante de derecho adscrito al consultorio jurídico de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali, con código No.30000070285, al Correo Electrónico: destradad@correo.usbcali.edu.co Teléfono: 3504647230

**QUINTO: TRASLADO.** De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 610 de 2000, surtida la notificación personal, se hace saber a cada uno de los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados de oficio y de confianza y al apoderado del tercero civilmente responsable, que disponen de un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para presentar los Argumentos de Defensa frente a la imputación efectuada, así como para solicitar y aportar las pruebas que pretendan hacer valer, los cuales habrán de ser radicados en la oficina de correspondencia de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, o a través de los correos electrónicos: cgr@contraloria.gov.co y/o soniaencinales@contraloria.gov.co advirtiéndole que durante dicho término el expediente permanecerá disponible en la Secretaría Común ubicada en la Calle 23 A Norte No. 3-95 Edificio San Paolo Barrio Versalles, de la ciudad de Cali-Valle del Cauca.

**SEXTO: SIN RECURSOS.** Contra el presente auto no proceden recursos.

**SEPTIMO.** Por Secretaría Común, líbrense las citaciones y notificaciones de rigor para el efectivo cumplimiento de lo aquí ordenado.

**ACTAVO:** Efectuar en los aplicativos institucionales las anotaciones que correspondan a la presente decisión.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**



**GUILLERMO ELIÉCER LÓPEZ PERDOMO**  
Contralor Provincial Ponente



**SANDRA PATRICIA RIVERA VELASCO**  
Contralora Provincial



**EARLD HERNANDO TEJEDA QUINTERO**  
Gerente Departamental  
Presidente de la Colegiatura



**JAIRO MANUEL ESTRADA MOSQUERA**  
Contralor Provincial

Proyectó: Sonia Encinales Bueno  
Profesional Universitario G.1  
Revisó: Adriana Franco Londoño  
Coordinadora de Gestión

Aprobado. Sesión extraordinaria Acta No. 76 del Comité de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle.

 <b>CONTRALORÍA</b> General de la República	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
	FECHA:
	Página 47 de 47
<b>AUTO No.                    IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL PRF-2019-00737</b>	

Fecha: septiembre 26 del 2024